

ESTADISTIKA BULETINA BOLETIN ESTADÍSTICO

ARABAKO GIZARTE ZERBITZUEN BEHATOKIA
OBSERVATORIO DE SERVICIOS SOCIALES DE ÁLAVA
www.dataraba.eus

22

AURKEZPENA

Etorkizunerako gakoak: beharren proiektzioa, gazteen aurreikuspenak, landatartasuna eta adimen artifiziala

Arabako Gizarte Zerbitzuen Behatokiaren hogeita bigarren Buletin honek orain arteko argitalpenen egiturari eusten dio, eta lurraldeko gizarte-zerbitzuen sareak garatutako jardueraren ikuspegi panoramikoa eskaintzen du hasierako atalean. Atal honetan, eskuragarri dauden baliabideen eskaintzari eta 2024an artatutako pertsonen buruzko datu eguneratuak aurkezten dira. Horri esker, sistemaren irismena, estaldura-maila eta Arabako herritarrei emandako arretaren intentsitatea ezagutu daiteke.

Ondoren, *Sakonean* atalak hiru analisi monografiko biltzen ditu, herritarren ongizaterako gai estrategikoetan sakontzen dutenak.

Lehenengo artikulua EAEko Gizarte Zerbitzuen II. Plan Estrategikoan ezarritako estaldura-irizpideak Araban aplikatzearen inplikazioak aztertzen ditu, erreferentzia gisa Lurralde Historikoko Gizarte Zerbitzuen II. Mapa prestatzeko prozesuaren esparruan egindako diagnostikoa erabiliz. Proiektzio demografikoetatik eta zerbitzuen egungo egoeraren eta EAEko Planak ezarritako erreferentziazko estalduren arteko alderaketatik abiatuta, artikulua hurbilketa bat eskaintzen du Arabako sistema estandar horiekin zenbateraino lerrokatzen den ezagutu, eta 2030eko horizontean estandar onartzeak zer ondorio izango litzukeen jakiteko. Ariketa horrek izaera analitikoa eta orientatiboa du, eta ez da gizarte-premien zuzeneko zenbatespena, ezta lurraldean garatu beharreko baliabideen aurreikuspen itxia ere.

PRESENTACIÓN

Claves para el futuro: proyección de necesidades, expectativas juveniles, ruralidad e inteligencia artificial

Este vigésimo segundo Boletín del Observatorio de Servicios Sociales de Álava mantiene la estructura de ediciones anteriores y dedica su apartado inicial a ofrecer una visión panorámica de la actividad desarrollada por la red de servicios sociales del territorio. En esta sección se presentan datos actualizados sobre la oferta de recursos disponibles y la demanda atendida a lo largo del año 2024, lo que permite conocer el alcance del sistema, su grado de cobertura y la intensidad de la atención prestada a la ciudadanía alavesa.

A continuación, la sección *A fondo* reúne tres análisis monográficos que profundizan en cuestiones estratégicas para el bienestar de la población alavesa.

El primero de los artículos analiza la aplicación en Álava de los criterios de cobertura establecidos en el II Plan Estratégico de Servicios Sociales de la CAPV, utilizando como referencia el diagnóstico elaborado en el marco del proceso de preparación del II Mapa de Servicios Sociales del Territorio Histórico. A partir de proyecciones demográficas y de la comparación entre la situación actual de los servicios y las coberturas de referencia autonómicas, el artículo ofrece una aproximación al grado de alineación del sistema alavés con dichos estándares y a las implicaciones que tendría su eventual adopción en el horizonte de 2030. Este ejercicio tiene un carácter analítico y orientativo, y no constituye una estimación directa de las necesidades sociales ni una previsión cerrada de los recursos que deban desarrollarse en el territorio.

Bigarren artikuluak Arabako gazteen egungo egoerari eta etorkizunerako itxaropenei erreparatzen die, Gazteen Euskal Behatokiak egindako adierazle nagusiak oinarri hartuta. Analisiak funtsezko alderdiak aztertzen ditu, hala nola prestakuntza, enplegua, emantzipazio-baldintzak eta ongizate-pertzepzioa, eta gazteen errealitatearen eta biztanleria-sektore horrek dituen erronka nagusien erradiografia eguneratua ematen du.

Hirugarren artikuluak landatartasuna neurtzeko eta Arabako nahiz Euskadi osoko lurralde-testuinguruan aplikatzeko moduak aztertzen ditu. Adierazleak eta ikuspegiak alderatuz, artikuluak lurralde-aniztasuna eta landa-inguruneen berezitasunak hobeto ulertzen laguntzen du, funtsezko alderdiak baitira zerbitzu eta baliabide publikoen plangintza orekatua egiteko.

Azkenik, buletina *Joerak* atalarekin ixten da. Bertan, adimen artifizialak (AA) gizarte-zerbitzuetan izan ditzakeen aplikazioak eta potentziala aztertzen ditu. Analisiak arreta berezia eskaintzen die AA zerbitzuetan txertatzeak dakartzan erronka etiko, sozial eta operatiboei, eta gogoeta egiten du gizarte-arretaren kudeaketan eta eskaintzan berrikuntzarako eta hobekuntzarako dauden aukerei buruz.

El segundo artículo centra su atención en la situación actual de la juventud alavesa y en sus expectativas de futuro, a partir de los principales indicadores elaborados por el Observatorio Vasco de la Juventud. El estudio examina dimensiones clave como la formación, el empleo, las condiciones de emancipación y la percepción de bienestar, aportando una radiografía actualizada de la realidad juvenil y de los principales retos que afronta este sector de la población.

El tercer artículo propone una aproximación a las distintas formas de medición de la ruralidad y su aplicación al contexto territorial tanto de Álava como del conjunto de Euskadi. A través de la comparación de indicadores y enfoques, el artículo contribuye a comprender mejor la diversidad territorial y las particularidades de los entornos rurales, aspectos fundamentales para una planificación equilibrada de los servicios y recursos públicos.

Finalmente, el boletín cierra con la sección *Tendencias*, que explora el potencial de la inteligencia artificial (IA) y sus posibles aplicaciones en el ámbito de los servicios sociales. El análisis presta especial atención a los retos éticos, sociales y operativos que plantea su incorporación, abriendo una reflexión sobre las oportunidades de innovación y mejora en la gestión y prestación de la atención social.

PANORAMA | IKUSPEGI

Más de 30.000 personas recibieron apoyo de los servicios sociales en Álava en 2024

Este artículo presenta una síntesis de los principales datos relativos a la oferta de servicios sociales en Álava en 2024 y al número de personas atendidas por el sistema. Además de analizar la cobertura de los distintos servicios y prestaciones, se incorporan datos sobre las diferencias territoriales en la atención a la dependencia y sobre el perfil de las personas usuarias de los recursos forales y concertados.

Álava cuenta con unas 7.400 plazas residenciales y diurnas

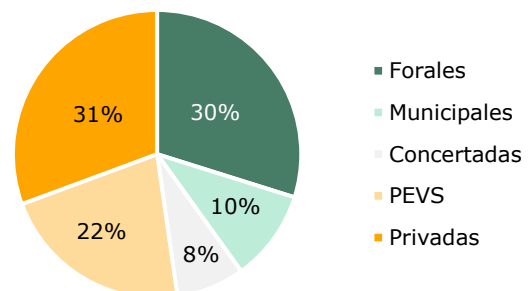
En 2024, Álava dispone de cerca de 5.500 plazas residenciales en la red de servicios sociales. La mayor parte de estas plazas se orienta a la promoción de la autonomía personal, con un claro predominio de los recursos dirigidos a personas mayores, que representan el 81% del total.

Tabla 1. Número y distribución de plazas residenciales de servicios sociales por contingencia y colectivo. Álava 2024

	Número	% total
Autonomía personal	4.880	89%
- Mayores	4.412	81%
- Discapacidad	295	5%
- Enfermedad mental	173	3%
Protección	377	7%
- Menores	265	5%
- Violencia de género	112	2%
Inclusión social	222	4%
Total	5.479	100%

Desde el punto de vista de la titularidad y la gestión, aproximadamente la mitad de las plazas residenciales en Álava son de responsabilidad pública, ya sea de titularidad foral o municipal, o bien provistas mediante conciertos con entidades privadas. El resto se distribuye entre plazas de titularidad privada (31%) y plazas financiadas mediante la Prestación Económica Vinculada al Servicio (22%).

Gráfico 1. Distribución de plazas residenciales por titularidad y gestión. Álava 2024



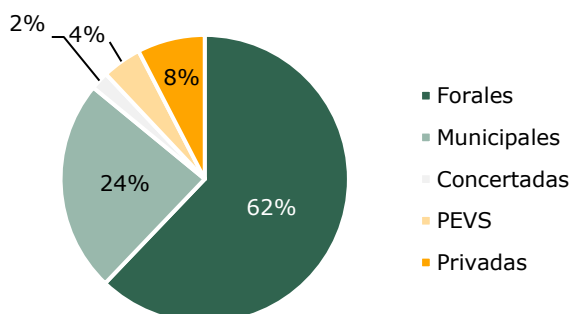
En cuanto a los recursos de atención diurna, en 2024 existen 1.878 plazas. Al igual que ocurre con las plazas residenciales, la gran mayoría —casi nueve de cada diez— están orientadas a la atención de personas con necesidades de apoyo en su autonomía personal. No obstante, a diferencia del ámbito residencial, en los recursos diurnos adquiere una mayor relevancia la atención a personas con discapacidad, que concentra aproximadamente un tercio de las plazas disponibles.

Tabla 2. Número de plazas en centros de atención diurna por colectivo. Álava 2024

	Número	% del total
Autonomía personal	1.672	89%
- Mayores	1.044	56%
- Discapacidad	563	30%
- Enfermedad mental	65	3%
Protección	136	7%
- Menores	136	7%
Inclusión social	70	4%
Total	1.878	100%

Otra diferencia reseñable respecto al ámbito residencial es la distribución por titularidad de los recursos. En el caso de la atención diurna, la oferta es mayoritariamente pública: el 88% de las plazas dependen de las administraciones públicas. La mayor parte corresponde a plazas de titularidad foral (62%), mientras que las municipales representan el 24% y las plazas concertadas el 2%.

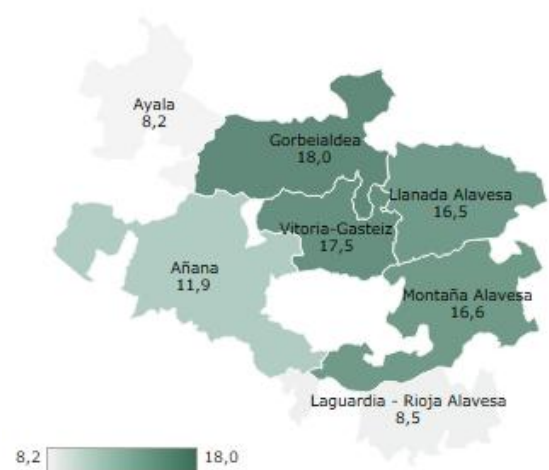
Gráfico 2. Distribución de plazas en centros de atención diurna por titularidad y gestión. Álava 2024



El análisis territorial muestra diferencias relevantes en la disponibilidad de plazas residenciales entre las distintas cuadrillas alavesas. La cuadrilla de Gorbeialdea presenta la mayor cobertura, con 18 plazas por cada 1.000 habitantes. En cambio, cuadrillas como Ayala o Rioja Alavesa cuentan con menos de 10 plazas por cada 1.000 habitantes.

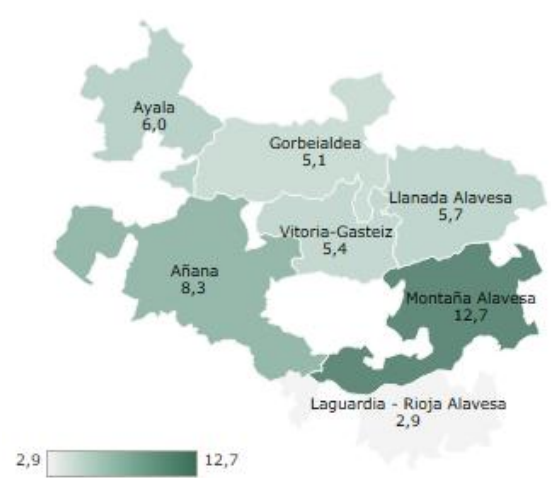
En el resto de las cuadrillas, la oferta se sitúa en niveles intermedios, con coberturas que oscilan entre 12 y 17 plazas residenciales por cada 1.000 habitantes.

Mapa 1. Cobertura de plazas en centros residenciales (por 1.000 habitantes), por cuadrilla. Álava 2024



En cuanto a los recursos de atención diurna, la Montaña Alavesa destaca por su elevada cobertura, con más de 12 plazas por cada 1.000 habitantes. Esta cifra triplica la cobertura registrada en otras cuadrillas, como Rioja Alavesa, donde la oferta se sitúa en torno a 3 plazas por cada 1.000 habitantes.

Mapa 2. Cobertura de plazas en centros de atención diurna (por 1.000 habitantes), por cuadrillas. Álava 2024



Los recursos domiciliarios adquieren peso en los servicios sociales de Álava

A finales de 2024, el sistema de servicios sociales de Álava atiende a más de 30.200 personas, lo que equivale aproximadamente al 9% de la población del territorio.

Aunque los servicios residenciales y de atención diurna concentran una parte relevante de la atención y sobre todo del gasto, destaca el peso de los servicios domiciliarios. Aproximadamente la mitad de las personas atendidas reciben apoyo en su domicilio a través del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) o del servicio de teleasistencia. Además, un 26% percibe alguna prestación económica.

En efecto, a finales de año, más de 10.000 personas son usuarias del servicio de teleasistencia, lo que equivale en torno al 3% de la población. Asimismo, cerca de 5.000 personas reciben ayuda a domicilio.

Entre las prestaciones económicas destacan las vinculadas al Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), con 5.707 personas beneficiarias a finales de 2024. Por su parte, más de 2.200 personas perciben otras prestaciones periódicas, como las Pensiones No Contributivas (PNC) o las del Fondo de Bienestar Social (FBS).

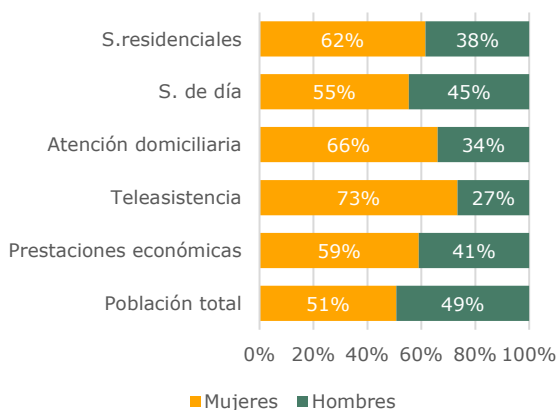
Tabla 3. Personas atendidas en los principales servicios y recursos sociales a 31 de diciembre y cobertura por 1.000 habitantes. Álava, 2024

	Número	Por 1.000
Servicios residenciales	4.165	12,3
Servicios de día	1.659	4,9
Atención domiciliaria	4.899	14,5
Teleasistencia	10.218	30,2
Prestaciones económicas SAAD	5.707	16,9
Otras prestaciones económicas (PNC, FBS)	2.249	6,6
Otros recursos*	1.308	3,9
Total	30.205	89,2

*Incluye el servicio de atención temprana, el acogimiento familiar y los programas especializados en intervención socioeducativa.

Cabe, por otra parte destacar que la mayor parte de las personas usuarias de los servicios sociales de apoyo a la autonomía personal son mujeres, especialmente en los recursos domiciliarios como la teleasistencia y el Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD). En contraste, en los servicios de atención diurna la distribución por sexo resulta algo más equilibrada, mostrando una participación más similar de hombres y mujeres.

Gráfico 3. Distribución por sexo de las personas usuarias de servicios y prestaciones a 31 de diciembre. Álava 2024

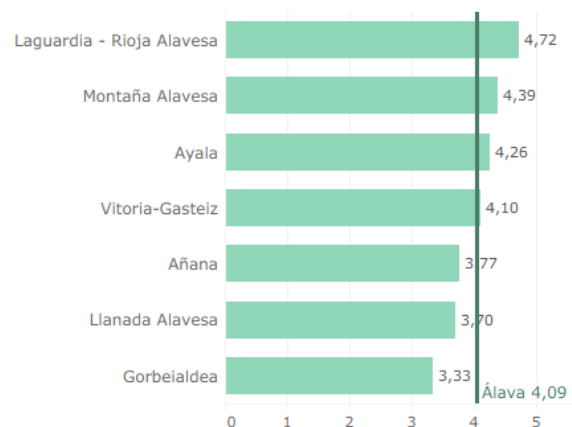


La atención de la dependencia por cuadrillas

En Álava, 13.864 personas tienen reconocido algún grado de dependencia a finales de 2024, lo que representa aproximadamente el 4% de la población. La prevalencia es mayor entre las mujeres (4,9%). Por otra parte, el 56% de las personas con dependencia reconocida tienen 80 años o más, y una de cada cuatro presenta gran dependencia (grado 3).

Desde el punto de vista territorial, la mayor prevalencia se registra en Rioja Alavesa (4,72%), seguida de Montaña Alavesa (4,39%) y Ayala (4,26%). El resto de las cuadrillas presentan valores iguales o inferiores a la media del territorio (4,09%).

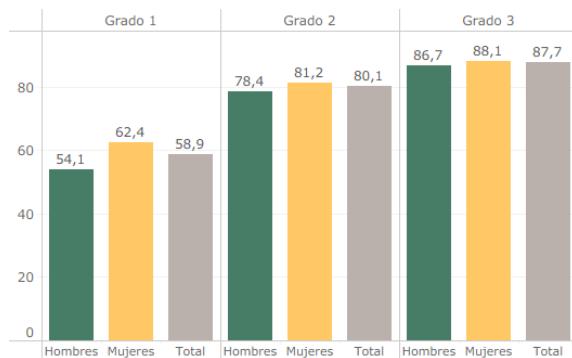
Gráfico 4. Prevalencia de la dependencia a 31 de diciembre (%), por cuadrillas. Álava 2024



Por lo que se refiere a la cobertura de las necesidades de las personas con dependencia reconocida, a finales de año, el 75,5% de ellas recibe algún servicio o prestación vinculado al Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), alcanzando una cobertura del 87,7% entre quienes presentan gran dependencia (grado 3).

Tal y como se muestra en el gráfico siguiente, la proporción de personas que reciben apoyos es ligeramente mayor entre las mujeres que entre los hombres, especialmente en el caso de la dependencia moderada (grado 1). En este grupo, el 62,4% de las mujeres cuentan con algún tipo de recurso, frente al 54,1% de los hombres.

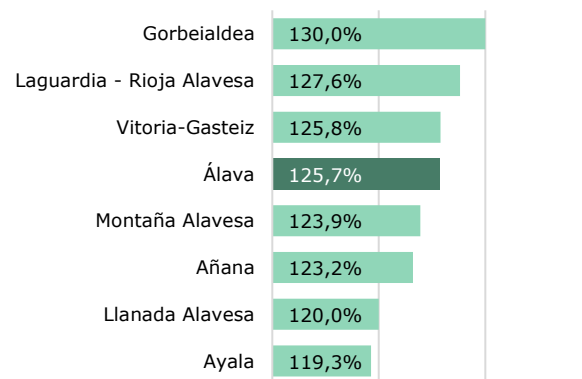
Gráfico 5. Porcentaje de personas con dependencia que percibe alguna prestación a 31 de diciembre (%), por sexo. Álava 2024



A finales de 2024 existen 12.738 prestaciones o servicios en vigor para 10.083 personas beneficiarias, lo que equivale a 1,26 prestaciones por persona.

La mayor cobertura específica se registra en Gorbeialdea, con 130 prestaciones en vigor por cada 100 personas con dependencia reconocida, seguida de Laguardia-Rioja Alavesa (127,6) y Vitoria-Gasteiz (125,8). El resto de las cuadrillas se sitúan por debajo de la media, siendo Ayala la que registra una cifra más baja, con algo menos de 120 prestaciones por cada 100 personas con dependencia reconocida.

Gráfico 6. Servicios y prestaciones del SAAD¹ en vigor a 31 de diciembre, por cada 100 personas con dependencia reconocida, por cuadrillas. 2024

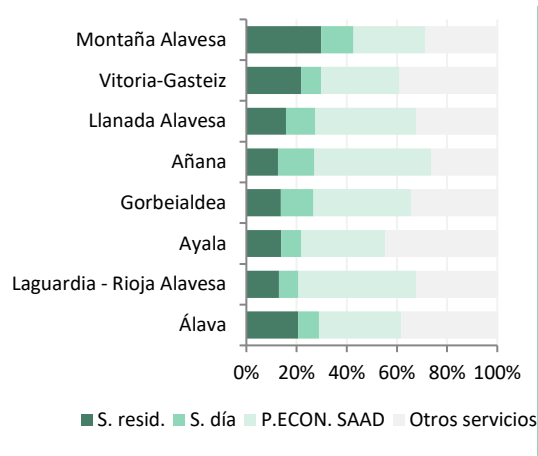


Además de estas diferencias en la cobertura general del SAAD, también se observan diferencias en el tipo de recursos utilizados. En la Montaña Alavesa, los servicios residenciales y de atención diurna concentran el 43% de las prestaciones activas. En cambio, en Rioja Alavesa y Añana las prestaciones económicas tienen un peso mayor, representando cerca de la mitad del total. En Ayala, por su parte, adquieren especial relevancia los servicios domiciliarios —SAD, teleasistencia y atención temprana—, que suponen el 45% de los recursos activos a final de año. Esta

¹ Se incluyen los servicios residenciales y diurnos para personas mayores, el servicio de atención temprana, el Servicio de Ayuda a Domicilio para personas dependientes y el servicio de teleasistencia. En el caso de la teleasistencia, se trata de una estimación a partir del dato facilitado por el Departamento de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico del Gobierno Vasco del porcentaje de personas usuarias que tienen dependencia reconocida a finales de año (28,3%).

elevada proporción se explica principalmente por la amplia cobertura del servicio de teleasistencia en esta zona.

Gráfico 7. Distribución de los servicios y prestaciones del SAAD en vigor a 31 de diciembre, por tipo de servicio o prestación y cuadrilla. 2024



Se detallan a continuación los datos sobre la cobertura específica de los servicios domiciliarios y las prestaciones económicas del SAAD, tanto a nivel territorial como de cuadrillas.

Por lo que se refiere al Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD), este atiende a finales de 2024 a cerca de 4.900 personas en todo el territorio, de las cuales aproximadamente el 60% tiene reconocido algún grado de dependencia.

Por cuadrillas, las coberturas más elevadas se registran en Vitoria-Gasteiz y Rioja-Alavesa, con un 1,52% y un 1,32% respectivamente. Sin embargo, si se considera específicamente a la población con dependencia, destaca la cobertura en Ayala, donde el 24,5% de las personas con

dependencia reconocida son usuarias de este servicio.

Tabla 4. Personas usuarias del Servicio de Ayuda a Domicilio a 31 de diciembre, por situación de dependencia y cuadrilla. 2024

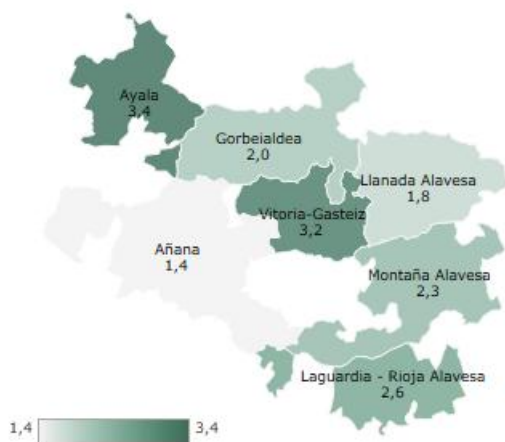
	Número usuarios/as		Cobertura (%)	
	Total	Depen.	Pob. total	Pob. Depen.
Añana	103	64	1,07	17,7
Ayala	447	357	1,30	24,5
Montaña Alavesa	28	21	0,89	15,2
Gorbeialdea	100	73	0,98	21,5
Rioja Alavesa	149	116	1,32	21,8
Llanada Alavesa	158	94	1,24	20,0
Vitoria-Gasteiz	3.914	2.191*	1,52	20,8
Álava	4.899	2.916	1,45	21,0

*Dato de la memoria del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.

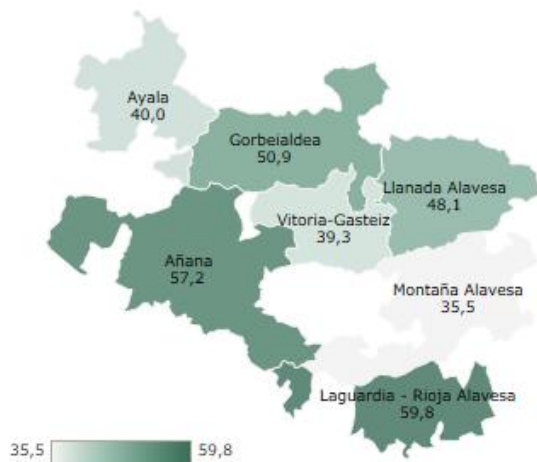
Respecto al servicio de teleasistencia, este atiende a finales de 2024 a 10.218 personas. Algo menos del 30% de las personas usuarias tiene dependencia reconocida (unas 2.800 personas), según datos del Gobierno Vasco.

En este caso, las coberturas más elevadas se observan en Ayala (3,4%), Vitoria-Gasteiz (3,2%) y, en menor medida, Rioja Alavesa (2,6%). En el extremo opuesto, la cobertura del servicio en Añana alcanza solamente al 1,4% de sus habitantes.

Mapa 3. Personas usuarias del servicio de teleasistencia por cada 100 habitantes, por cuadrillas. Álava 31/12/2024



Mapa 4. Titulares de prestaciones económicas del SAAD por cada 100 personas con dependencia, por cuadrillas. Álava 31/12/2024



Para concluir esta comparación territorial, es pertinente señalar que la cobertura de las prestaciones económicas del SAAD alcanza niveles superiores en las cuadrillas de Rioja Alavesa y Añana, donde aproximadamente el 60% de las personas con dependencia reciben dichas ayudas. En contraste, la cuadrilla de Montaña Alavesa presenta una cobertura inferior, situándose en el 35,5%.

El perfil de las personas usuarias de los recursos forales y concertados

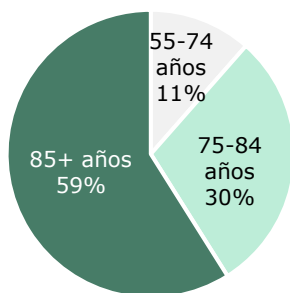
La información disponible sobre las personas atendidas en los recursos gestionados por la administración foral permite analizar con mayor detalle las características de quienes utilizan los servicios sociales en Álava.

Los datos desagregados por edad muestran que la mayoría de las personas atendidas en centros residenciales y de atención diurna pertenece a los grupos de mayor edad. Aproximadamente seis de cada diez personas usuarias tienen 85 años o más, mientras que cerca de un tercio se sitúa entre los 75 y los 84 años. El 11% restante corresponde a personas menores de 75 años.

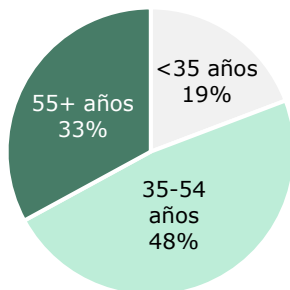
En los centros destinados a la atención de personas con discapacidad o con enfermedad mental, el perfil de edad es diferente. En estos recursos, aproximadamente la mitad de las personas usuarias tiene entre 35 y 54 años, mientras que alrededor de un tercio tiene 55 años o más y un 19% es menor de 35 años.

Gráfico 8. Distribución por edad de las personas usuarias de servicios residenciales y de atención diurna forales y concertados a 31 de diciembre. Álava 2024

Centros para personas mayores



Centros para personas con discapacidad o enfermedad mental



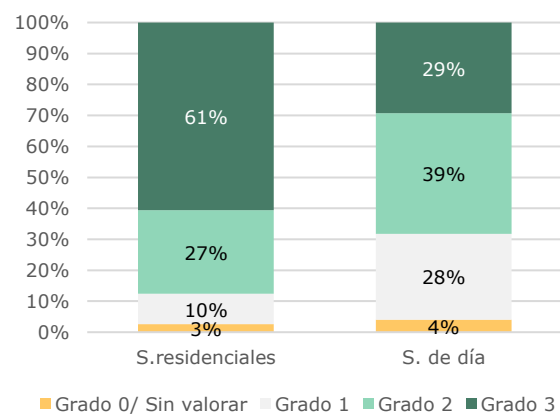
El análisis de la distribución de las personas usuarias de recursos forales por grados de dependencia permite asimismo profundizar en el perfil de atención de estos recursos.

El primer dato a destacar es que, en los centros residenciales, el 60% de las personas usuarias son grandes dependientes (grado 3), mientras que, en los servicios de atención diurna, este grupo representa cerca del 30%.

Como consecuencia, en los recursos diurnos existe una mayor presencia de personas

con dependencia más ligera: el 39% tiene dependencia grave (grado 2) y el 28% dependencia moderada (grado 1).

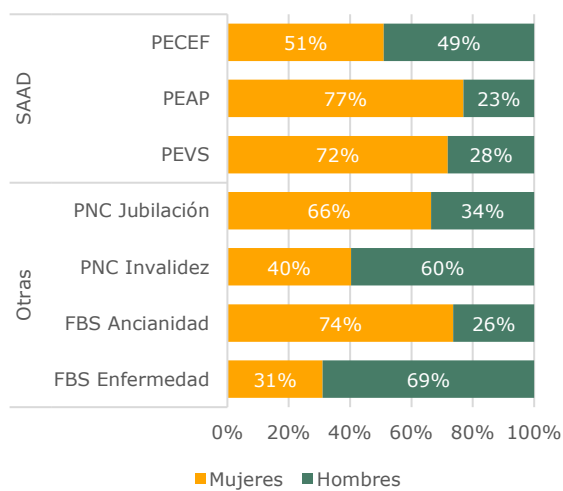
Gráfico 9. Distribución por grado de dependencia de las personas usuarias de servicios residenciales y de atención diurna forales y concertados a 31 de diciembre. Álava 2024



La desagregación por sexo no revela diferencias significativas entre los servicios residenciales y diurnos. Sin embargo, la proporción de mujeres es significativamente más elevada en los centros destinados a personas mayores (72%) en comparación con los dirigidos a personas con discapacidad (42%) y a personas con enfermedad mental (33%).

Las diferencias de género son también evidentes en el caso de las prestaciones económicas. Los datos indican que una mayor proporción de hombres percibe prestaciones vinculadas a la incapacidad laboral, mientras que las prestaciones asociadas a la edad presentan un predominio de mujeres entre sus beneficiarias. Esta diferencia puede estar relacionada con la menor participación histórica de las mujeres en el mercado laboral y con su mayor esperanza de vida.

Gráfico 10. Distribución por sexo de las personas receptoras de prestaciones económicas a 31 de diciembre. Álava 2024



En el caso de las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), se observa que la proporción de hombres beneficiarios de la Prestación Económica para Cuidados en el Entorno Familiar (PECEF) es superior a la registrada en otras prestaciones.

En cambio, las prestaciones económicas de asistencia personal (PEAP) y las prestaciones económicas vinculadas al servicio (PEVS) presentan una mayor proporción de mujeres beneficiarias. Estas diferencias se mantienen cuando se considera la cobertura específica en relación con la población con reconocimiento de dependencia.

En efecto, por una parte, la cobertura de la PECEF entre los hombres con dependencia es del 35,6%, reduciéndose al 23,8% entre las mujeres en la misma situación. Por otra parte, tanto la PEAP como la PEVS presentan una mayor incidencia en mujeres dependientes, si bien el número de personas

beneficiarias de estas ayudas resulta relativamente menor.

Tabla 5. Personas titulares y cobertura de prestaciones económicas del SAAD a 31 de diciembre, por sexo. Álava, 2024

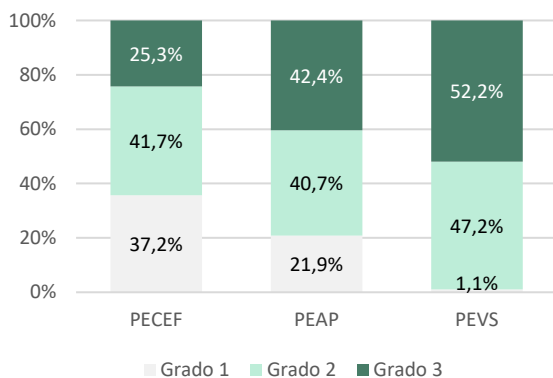
	Personas titulares		Cobertura pob. dependiente	
	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
PECEF	1.930	2.009	35,6%	23,8%
PEAP	117	390	2,2%	4,6%
PEVS	355	906	6,5%	10,7%

Las diferencias entre hombres y mujeres en el acceso a estas ayudas pueden estar relacionadas con el modelo social tradicional de reparto de los cuidados no remunerados. Habitualmente, las responsabilidades de atender a los familiares recaen sobre las mujeres dentro del hogar. Además, cuando una mujer necesita apoyo por dependencia, suele ser habitual que reciba ayuda de una persona trabajadora externa especializada.

Los datos desagregados por grado de dependencia también muestran claras diferencias en cuanto a personas titulares de prestaciones económicas del SAAD se refiere.

Las personas con dependencia moderada (grado 1) tienen una mayor representación entre las personas receptoras de la prestación económica de cuidados en el entorno familiar (PECEF), mientras que aquellas de mayor grado de dependencia (grado 3) constituyen más de la mitad de las personas titulares de prestaciones económicas vinculadas al servicio (PEVS).

Gráfico 11. Distribución por grado de dependencia de las personas receptoras de prestaciones económicas del SAAD a 31 de diciembre. Álava, 2024



Atención a la desprotección infantil

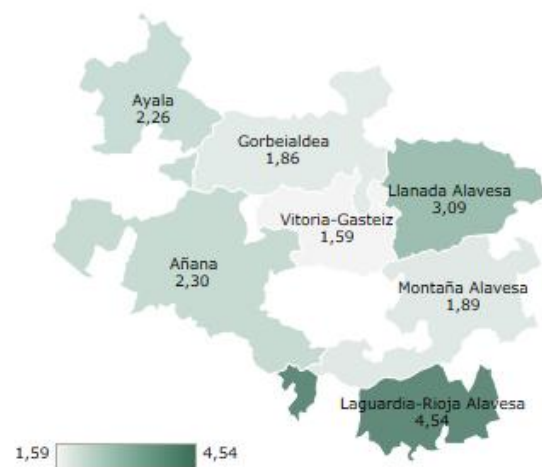
Además de la atención a la dependencia, el Sistema Vasco de Servicios Sociales también se ocupa de abordar situaciones de desprotección. Esto incluye la intervención con personas menores de edad que se encuentran en riesgo o en situación de desamparo, así como con mujeres que han sido víctimas de violencia machista. En esta sección se presentan los datos relativos a la atención a ambas contingencias durante el año 2024 en Álava.

A finales de 2024, 1.049 personas menores de edad tienen abierto un expediente de desprotección, lo que equivale al 1,86% de la población menor de 18 años del territorio. El 59% de estos expedientes corresponden a niños y el 41% a niñas.

El análisis de estos datos por cuadrillas revela que en Rioja Alavesa la proporción de expedientes abiertos es considerablemente superior, alcanzando el 4,54% de la población menor en dicha zona. En segundo lugar se sitúa la cuadrilla de Llanada Alavesa, con un 3,09%, lo que representa casi el

doble de la tasa observada en Vitoria-Gasteiz (1,59%).

Mapa 5. Tasa de personas menores de edad con expediente de desprotección a 31 de diciembre (%), por cuadrillas. Álava, 2024

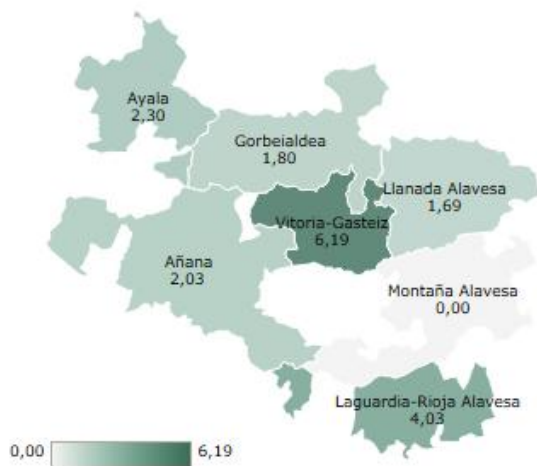


Por el contrario, Vitoria-Gasteiz registra la cifra más alta de personas menores de edad bajo tutela de la Diputación Foral.

De las 305 personas menores de edad tuteladas a finales de 2024, el 87% residen en la capital, lo que hace que la tasa ascienda a 6,2 personas por cada mil.

No obstante, esta distribución dispar puede estar condicionada por la ubicación de los servicios residenciales para personas menores, que se concentran precisamente en Vitoria-Gasteiz. Por esta razón, es habitual que las personas menores de edad en situación de desamparo sean empadronadas en dicho municipio a fin de facilitar su acceso a los recursos de acogida.

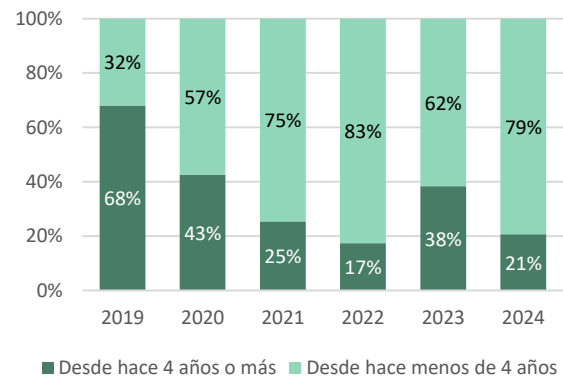
Mapa 6. Tasa de personas menores de edad tuteladas por la Diputación Foral a 31 de diciembre (por 1.000), por cuadrillas. Álava, 2024



Respecto a las características de las personas menores de edad tuteladas, los datos indican que 187 son niños, lo que representa un 61% del total, y 118 niñas (39%). En cuanto a la distribución por edades, destaca que la mayoría de las personas tuteladas se concentra en el grupo de 12 a 17 años, que supone el 66% del total. Por otro lado, aproximadamente una quinta parte (20%) de las personas tuteladas tiene entre 6 y 11 años, mientras que el 14% son menores de 6 años.

Desde la perspectiva de la duración de la tutela, los datos indican que en el 21% de los casos, las personas menores de edad han estado bajo tutela durante cuatro años o más.

Gráfico 12. Distribución de las personas menores de edad tuteladas por la Diputación a 31 de diciembre, por tiempo de tutela. Álava 2019-2024



En 2024, se han asumido en Álava un total de 132 nuevas tuteladas, correspondientes a 82 niños (32%) y 50 niñas (38%). La mayoría de estas tuteladas se concentra en personas de entre 12 y 17 años, que representan el 66,7% del total. Por otra parte, durante este mismo año se han registrado 119 ceses de tutela.

Además de las 305 personas menores de edad bajo tutela de las autoridades forales, a finales de 2024 hay 785 personas menores de edad atendidas por los principales servicios de atención a situaciones de desprotección.

El 37,5% de las personas menores de edad atendidas cuenta con medidas de separación familiar, mientras que el 62,5% restante recibe apoyo a través de programas de preservación familiar, principalmente mediante intervenciones socioeducativas especializadas.

Tabla 6. Población menor atendida por los principales servicios forales para personas menores de edad en riesgo o situación de desprotección a 31 de diciembre. Álava, 2024

	Número	% del total
Medidas de separación familiar	349	41,5%
Acogimiento residencial ¹	255	30,4%
Acogimiento familiar	94	11,2%
Medidas de preservación familiar	491	58,5%
Programas socioeducativos en centros de día	139	16,5%
Programas especializados de intervención socioeducativa	352	41,9%
Total	840	100%

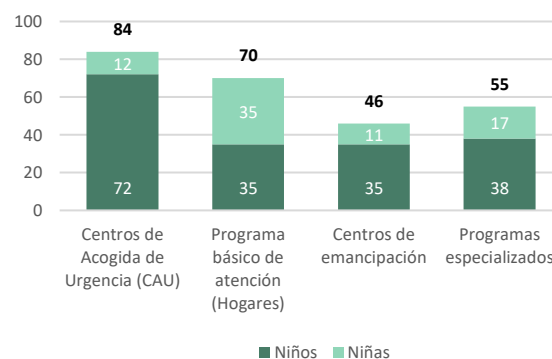
A finales de 2024, casi 1 de cada 4 personas menores de edad que se encuentran bajo medidas de separación familiar están alojadas en centros residenciales:

- El 33% está atendido en centros de acogida y urgencias;
- Un 27% es atendido en el programa básico de acogida, es decir, en hogares;
- Un 18% reside en centros especialmente habilitados para la preparación hacia la emancipación;
- Y el restante 22% es atendido en programas especializados.

Teniendo en cuenta el perfil de las personas atendidas en estos recursos, se observa que la presencia de chicas es relativamente menor en los centros de acogida y urgencia, así como en los programas de emanci-

pación, donde constituyen menos de un tercio del total. En el caso de los centros de acogida y urgencias, esta baja proporción obedece a que, en el centro Bideberria –destinado a la atención de personas extranjeras menores de edad no acompañadas–, todas las personas atendidas a finales de año eran chicos.

Gráfico 13. Distribución de las personas menores de edad en acogimiento residencial a 31 de diciembre, por sexo y programa. Álava 2024



Otras características, como la edad o la nacionalidad, también presentan diferencias significativas según el tipo de programa de acogimiento residencial.

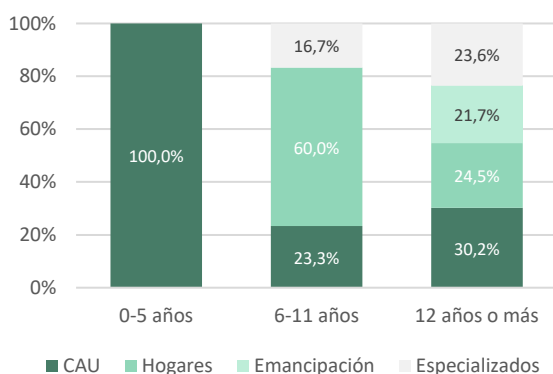
Por ejemplo, los niños y niñas menores de 6 años, se encuentran exclusivamente en centros de acogida y urgencia. Tras una evaluación exhaustiva de su situación familiar y personal, estas personas menores de edad suelen ser derivadas al programa básico de acogida, donde pueden recibir una atención más estable y adaptada a sus necesidades.

En el caso de las personas de entre 6 y 11 años, la mayoría (60%) reside en hogares, un recurso que ofrece una atención integral para cubrir las necesidades materiales,

afectivas y educativas de niños, niñas y adolescentes.

Entre quienes tienen 12 o más años, se observa un aumento de la presencia en programas especializados –algunos de ellos específicamente orientados a la atención de adolescentes–, así como en programas para la emancipación, que buscan favorecer su autonomía progresiva. También se incrementa ligeramente el porcentaje de personas atendidas en centros de acogida y urgencias respecto al grupo de menor edad. Este aumento puede estar relacionado con la necesidad de atención inmediata que presentan algunas de las personas adolescentes que llegan solas al territorio alavés.

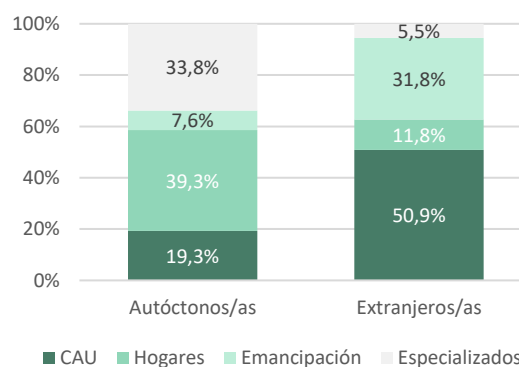
Gráfico 14. Distribución por tipo de programa de personas menores de edad en acogimiento residencial a 31 de diciembre, en función de la edad. Álava 2024



En relación con la nacionalidad, los datos muestran que la mitad de las personas menores de edad de origen extranjero son atendidas en centros de acogida y emergencias, y otro tercio participa en programas para la preparación de la emancipación.

En cambio, entre las personas menores de edad autóctonas, prevalece el alojamiento en hogares (39,3%) y la atención en programas especializados (33,8%).

Gráfico 15. Distribución por tipo de programa de personas menores de edad en acogimiento residencial a 31 de diciembre, en función del origen. Álava 2024



Además de las 255 personas menores de edad en acogimiento residencial, otras 94 se encuentran acogidas en familias a finales de 2024, lo que equivale al 27% del total de personas menores de edad sujetas a medidas de separación familiar.

La mayoría de los acogimientos familiares vigentes (62,8%) son de carácter permanente, mientras que el 36,2% son acogimientos temporales. Asimismo, se observa que el porcentaje de personas menores de edad acogidas por su familia extensa es ligeramente superior.

Tabla 7. Características de la población menor de edad en acogimiento familiar a 31 de diciembre. Álava, 2024

	Número	% del total
Sexo		
Niños	52	55,3%
Niñas	42	44,7%
Modalidad de acogimiento		
De urgencia (hasta 6 meses)	1	1,1%
Temporal (hasta 2 años)	34	36,2%
Permanente	59	62,8%
Tipo de acogimiento		
En familia extensa	54	57,4%
En familia ajena	40	42,6%
Total	94	100%

Se refuerza la atención a mujeres víctimas de violencia machista con un nuevo centro integral de apoyo

A lo largo de 2024, 122 mujeres han estado alojadas en centros de la red de recursos de acogida residencial para víctimas de violencia machista, acompañadas por otras 142 personas a su cargo. La mayor parte de ellas (66%) han sido atendidas en el centro de acogida inmediata (CAI), donde se les realiza una valoración de sus necesidades para su derivación al recurso más idóneo.

Además de las mujeres atendidas en la red de recursos de acogida residencial, 1.532 mujeres han sido usuarias del Servicio Foral Hegoak de atención especializada en violencia machista.

Este servicio presta dos tipos de atención: por un lado, 1.172 mujeres han recibido durante 2024 apoyo psicosocial, orientado a

la recuperación del daño traumático derivado de la violencia, a la mejora de la autoestima y al desarrollo de habilidades para afrontar la situación; por otro lado, 360 mujeres han acudido al servicio para recibir orientación jurídica especializada.

Tabla 8. Mujeres usuarias y alcance (por 1.000 mujeres) de los servicios para víctimas de violencia de género a lo largo del año. Álava, 2024

	Mujeres usuarias	Alcance (por 1.000 mujeres víctimas ²)
S. residenciales	45	4,3
S. de atención psicosocial	1.172	112,6
S. de asesoramiento jurídico	360	34,6
Centro de atención integral a víctimas de violencia sexual	149	14,3

Como novedad, en abril de 2024 se inauguró el centro Tximeletak, un nuevo recurso de atención especializada destinado a mujeres víctimas de violencia sexual.

Este centro ofrece un enfoque integral, combinando apoyo psicológico, social y jurídico, con el objetivo de acompañar a las mujeres en su proceso de recuperación y empoderamiento. Desde su apertura, Tximeletak ha brindado atención a 149 mujeres.

² Se trata de una estimación basada en el porcentaje de mujeres de entre 16 y 85 años que han sido víctimas de algún tipo de violencia recientemente, es decir, en el último año (7,4%). Los datos provienen de la Encuesta de violencia contra las mujeres y otras formas de violencia interpersonal realizada por el Departamento de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico en 2024. Este porcentaje se ha aplicado al número de mujeres de esa misma franja de edad residentes en Álava para estimar el número de mujeres que sufren este tipo de violencia anualmente.

Servicios y prestaciones para personas en situación de exclusión

Para completar este panorama general sobre la atención ofrecida por la red de servicios sociales en Álava durante 2024, a continuación, se presentan los datos más destacados sobre el apoyo proporcionado a personas en situación de riesgo o exclusión social.

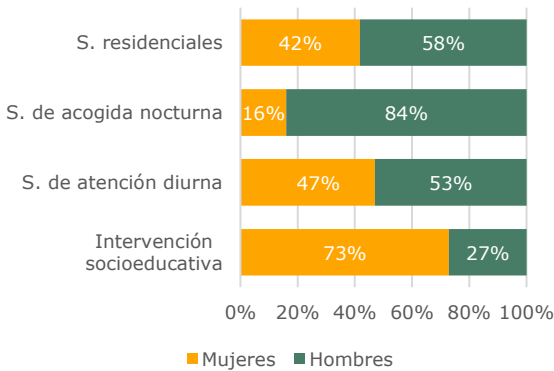
A lo largo del año, 600 personas han pernoctado en servicios residenciales o de acogida nocturna. Además, 779 personas han participado en servicios de atención diurna, tanto en el centro de día de Estrada como a través del programa Oinez, orientado a la inclusión en zonas rurales. Por último, 527 personas han sido usuarias del servicio de intervención socioeducativa para personas en riesgo o en situación de exclusión social.

En cuanto al perfil de las personas atendidas, los datos muestran que, en la mayoría de los recursos para personas en riesgo o situación de exclusión social, hay una mayor presencia de hombres que de mujeres, especialmente en los servicios de acogida nocturna, donde las mujeres representan menos del 20% del total. No obstante, como excepción, los servicios de intervención socioeducativa atienden a un número mayor de mujeres que de hombres.

Tabla 9. Personas usuarias a lo largo del año y alcance (por 1.000 habitantes) de los principales servicios para personas en riesgo o situación de exclusión social. Álava, 2024

	Personas usuarias	Alcance (por 1.000 en riesgo de pobreza y/o exclusión ³)
Servicios residenciales	249	4,0
S. de acogida nocturna	351	5,6
S. de atención diurna	779	12,4
Intervención socioeducativa	527	8,4

Gráfico 16. Distribución por sexo de las personas usuarias a lo largo del año de servicios destinados a personas en riesgo o situación de exclusión social. Álava 2024



³ Según los últimos resultados disponibles de la Encuesta de Pobreza y Exclusión Social (EPDS 2022), se calcula que algo más de 60.000 personas (el 18,6% de la población) se encuentra en situación de riesgo de pobreza o exclusión social en Álava.

Para concluir, al margen de los recursos contemplados en la cartera de prestaciones y servicios del Sistema Vasco

de Servicios Sociales, hay una serie de ayudas y prestaciones económicas para la suficiencia de ingresos, como las ayudas de emergencia social o las prestaciones para la garantía de ingresos y para la inclusión.

A lo largo de 2024, un total de 469 personas han sido beneficiarias de las ayudas de emergencia social tramitadas por el Instituto Foral de Bienestar Social – además de la AES gestionada por los Ayuntamientos de Vitoria-Gasteiz, Llodio y Amurrio– y otras 155 personas han percibido ayudas especiales para situaciones de necesidad. En el caso de las AES, la mayoría de las personas beneficiarias (61,2%) son mujeres.

Tabla 10. Personas titulares de ayudas y prestaciones económicas de garantía de ingresos y para la inclusión⁴. Álava, 2024

	Titulares	% mujeres
Ayudas de Emergencia Social (AES - Foral)	469	61,2%
Ayudas especiales a situaciones de necesidad	155	36,8%
Renta de Garantía de Ingresos (RGI)	10.185	57,1%
Ingreso Mínimo Vital (IMV)	5.982	58,0%

Fuentes: Instituto Foral de Bienestar Social (IFBS), Lanbide, Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

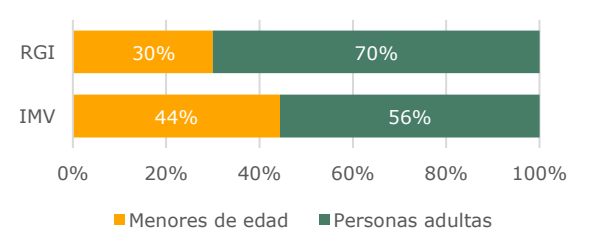
⁴ Los datos de las ayudas de emergencia social son a lo largo del año, mientras que aquellos sobre las prestaciones para la garantía de ingresos (RGI, IMV) hacen referencia a diciembre de 2024.

En cuanto a las prestaciones económicas de garantía de ingresos y para la inclusión, a finales de 2024, más de diez mil personas son titulares de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) en Álava, y cerca de seis mil reciben el Ingreso Mínimo Vital (IMV).

Respecto al perfil de las personas titulares de estas prestaciones, en ambos casos, las mujeres representan en torno al 60% del total. No obstante, según el origen se observan diferencias, ya que en el caso de la RGI el 62,5% de las personas titulares son de origen extranjero, mientras que la mayoría de las personas que perciben el IMV son de nacionalidad española (65,1%).

Finalmente, cabe destacar el impacto que estas prestaciones económicas tienen en los hogares, especialmente en la población menor de edad, dado que el porcentaje de personas menores beneficiarias es relativamente elevado en ambos casos.

Gráfico 17. Distribución por edad de las personas beneficiarias de prestaciones de garantía de ingresos y para la inclusión. Álava, diciembre de 2024



A FONDO | SAKONEAN

Análisis de la aplicación de las coberturas del II Plan Estratégico de Servicios Sociales de la CAPV en el diagnóstico del sistema en Álava

La planificación de los servicios sociales en Euskadi se apoya cada vez más en criterios homogéneos de cobertura y despliegue territorial, orientados a favorecer un acceso equitativo a los recursos del Sistema Vasco de Servicios Sociales (SVSS). No obstante, el II Plan Estratégico de Servicios Sociales 2023-2026 identifica que siguen existiendo diferencias interterritoriales en la cobertura de algunos servicios y subraya la necesidad de anticipar la evolución de las necesidades sociales y orientar el desarrollo planificado del sistema, tanto en el conjunto de la CAPV como en cada territorio histórico.

En este marco, la Ley 12/2008 de Servicios Sociales define el Mapa de Servicios Sociales como un instrumento clave para establecer criterios poblacionales y territoriales de implantación, atendiendo a la naturaleza de los servicios, al volumen de población potencialmente usuaria y a la proximidad necesaria para facilitar la integración de las personas usuarias en su entorno habitual. A partir de estas directrices, las diputaciones forales, en colaboración con los entes locales, desarrollan su propia planificación territorial, respetando el marco autonómico y adaptándolo a las características y necesidades específicas de cada territorio.

En el marco del proceso de definición del II Mapa de Servicios Sociales del Territorio Histórico de Álava 2024-2030, actualmente en marcha, la Diputación Foral de Álava ha

realizado un *diagnóstico previo*⁵, como punto de partida para abordar el ejercicio de planificación conjunta que se desarrollará en el seno de la Mesa Interinstitucional de Servicios Sociales del territorio a lo largo de 2026 y que dará lugar a un acuerdo sobre los objetivos prioritarios para los servicios sociales alaveses en el horizonte de 2030.

En este artículo de la sección *A fondo* se resumen brevemente los principales datos que aporta el diagnóstico realizado respecto a la previsible evolución de la población alavesa y al impacto que podría tener esa evolución en las contingencias que abarca el sistema, así como a la dotación adicional de recursos que implicaría adoptar los objetivos recomendados en la planificación autonómica para el territorio histórico.

A la hora de interpretar estos datos, conviene tener presente que las recomendaciones del II Plan Estratégico de Servicios Sociales de la CAPV 2023-2030 responden a una lógica de planificación encaminada a reducir los desequilibrios territoriales, así como a una progresiva reorientación del sistema hacia un mayor peso de la atención en la comunidad. En este sentido, no constituyen un dimensionamiento de las necesidades reales y expresadas de la población, sino una proyección “corregida” de la oferta actual, que la adecua a la previsible evolución de la población y trata de promover una progresiva reorientación comunitaria del modelo de atención y la convergencia territorial de las coberturas.

En consecuencia, es importante subrayar que los déficits identificados en el

⁵ SIIS (2024). Diagnóstico previo para la elaboración del Mapa de Servicios Sociales de Araba 2024-2030. Diputación Foral de Álava.

diagnóstico no constituyen una estimación directa de las necesidades, sino el resultado de comparar la dotación actual de recursos (plazas, horas o personas atendidas, según el servicio) con objetivos normativos de cobertura definidos a escala autonómica. Se trata, por tanto, de un ejercicio de extrapolación planificadora encaminado a identificar brechas potenciales y a dimensionar, de forma orientativa, los ajustes requeridos para avanzar hacia los estándares de referencia.

Proyecciones demográficas e hipótesis sobre las contingencias a atender por el sistema en 2030

Uno de los elementos clave del documento de diagnóstico es la incorporación de proyecciones demográficas a corto plazo y de estimaciones sobre el número de personas que podrían encontrarse en cada una de las tres contingencias que cubre el sistema, a saber: situaciones de dependencia o limitación de la autonomía personal, situaciones relacionadas con la desprotección de personas menores de edad o adultas, y situaciones vinculadas a procesos de exclusión social. El propósito de estas previsiones es obtener una estimación del volumen de población que podría necesitar atención de los servicios sociales en 2030.

Las proyecciones de población muestran, en primer lugar, una continuación del proceso de envejecimiento de la población en Álava, con un crecimiento sostenido del grupo de personas de 80 y una contracción de la población infantil.

En efecto, las proyecciones de población a corto plazo que elabora Eustat prevén que, en los próximos años, Álava mantenga saldos vegetativos negativos y saldos migratorios positivos, de modo que el crecimiento de la población dependerá exclusivamente de la migración neta. De acuerdo con esas previsiones, la población del Territorio Histórico de Álava pasaría de 338.904 personas en 2023 a 354.974 en 2030, lo que supone un aumento de 4,8%, tal como se recoge en la tabla 1.

Tabla 1. Evolución proyectada de la población por grupos de edad. Álava, 2023-2030

	Población total (miles de personas)			Evolución Miles de personas (%)
	2023	2030		
0-17 años	56.583	51.019	▼	-5.564 (-9,8%)
18-64 años	205.865	214.367	▲	+8.502 (+4,1%)
65-79 años	53.406	60.371	▲	+6.965 (+13,0%)
80+ años	23.050	29.216	▲	+6.166 (+26,8%)
Total	338.904	354.974	▲	16.119 (+4,8%)

Fuentes: INE. Estadística Continua de Población; INE. Proyecciones demográficas 2024-2074.
Notas: los datos de población corresponden al 01/01/2024 y el 01/01/2031, respectivamente.

Más allá del crecimiento agregado, el cambio más relevante que se prevé es la transformación de la estructura por edades, marcada por un proceso de envejecimiento sostenido. La población de 65 años o más alcanzará en 2030 las 89.588 personas (+17,2%), situándose en torno al 25,2% del total. La tendencia será aún más pronunciada en el tramo de 80 años o más, que crecería un 26,8%, frente al 13,0% previsto para el grupo de 65-79 años.

Este aumento reforzará el proceso de sobreenviejecimiento, lo que tendrá efectos directos sobre la planificación de servicios vinculados a la dependencia, los apoyos comunitarios y los recursos de atención diurna y residencial.

En paralelo, la población de 0–17 años se contraerá, mientras que la de 18–64 años crecerá ligeramente. Sin embargo, el peso relativo de este grupo en edad laboral se reducirá debido al avance de los grupos de edad avanzada. Como consecuencia, aumentará la dependencia demográfica, lo que incrementará el número de personas potencialmente demandantes de cuidados por cada persona en edad activa y, con ello, la presión sobre los servicios y apoyos de larga duración.

Hipótesis sobre la evolución de las diferentes contingencias atendidas por los servicios sociales

Situaciones de dependencia y riesgo de dependencia

En 2023, se contabilizan 13.194 personas con dependencia reconocida (grado I, II o III), a las que se suman 5.101 personas en situación de riesgo de dependencia, lo que equivale a una prevalencia del 5,4% sobre el conjunto de la población. No obstante, la distribución por edades muestra un patrón muy concentrado en los grupos de mayor edad. Entre las personas de 65 a 79 años, la prevalencia alcanza el 6,6%, mientras que en el grupo de 80 años o más se eleva hasta el 43,9%.

En esta línea, en el grupo de 80 años o más se observa, además, una diferencia relevante por sexo, con una mayor prevalencia entre las mujeres (49,3%) que entre los hombres (29,6%). Entre los

factores explicativos se señalan la mayor edad media de las mujeres en este tramo y una mayor presencia de problemas de salud incapacitantes no mortales. También influyen variables como la clase social y el nivel educativo, tal como muestran los resultados de la ESCAV 2023.

De cara a 2030, la evidencia apunta a que la prevalencia relativa podría descender ligeramente, pero el número total de personas en riesgo o en situación de dependencia aumentará debido al envejecimiento de la población. Manteniendo las prevalencias actuales, las personas con dependencia reconocida ($\geq$ grado I) aumentarían de 13.194 en 2023 a 15.495 en 2030 (+2.301). En paralelo, la población en riesgo de dependencia pasaría de 5.101 a 5.955 (+854). En conjunto, se estiman 3.155 personas adicionales en alguna de estas situaciones, un incremento atribuible exclusivamente al cambio en la estructura por edades.

Tabla 2. Proyección del número de personas en riesgo o en situación de dependencia por grado. Álava, 2023-2030

	2023	2030 (N) / Δ N
Riesgo	1,5%	5.955 / +854
Dependencia (total)	3,9%	15.495 / +2.301
Grado I	1,7%	6.570 / +943
Grado II	1,3%	4.967 / +717
Grado III	1,0%	3.958 / +641
Total (riesgo+dependencia)	5,4%	21.450 / +3.155

Fuentes: Instituto Foral de Bienestar Social (IFBS). Personas valoradas con el Baremo de Valoración de la Dependencia (BVD) a 31 de diciembre. INE. Estadística Continua de Población a 01/01/2024. INE. Proyecciones demográficas 2024-2074. Nota: la proyección se basa en un supuesto de tasas de prevalencia constantes por grandes grupos de edad.

Situaciones de desprotección y riesgo de desprotección: infancia y violencia de género

Los servicios sociales de protección se dirigen fundamentalmente a dos contingencias: las situaciones de desprotección infantil y la violencia machista. En el caso de los niños, niñas y adolescentes de ÁLAVA, las situaciones de desprotección grave, estimadas a partir del número de personas menores de edad que han tenido abierto un expediente en el Área del Menor y la Familia de la Diputación Foral, afectan al 2,031% de la población infantil y adolescente (1.149 casos), y las de carácter leve a moderado, o de riesgo, estimadas a partir de diferentes indicadores de la Encuesta de Necesidades Sociales⁶, alcanzan el 2,757% (1.570 menores), ambas con una tendencia reciente al alza.

Factores como la pobreza en hogares con hijos, el aumento de la población de origen extranjero y el crecimiento de las familias monoparentales apuntan a que la prevalencia no disminuirá a corto plazo. Adoptando una estimación conservadora para la vigencia del Mapa, si las tasas de desprotección infantil se mantienen estables, la contracción demográfica del grupo de 0 a 17 años podría traducirse en unos 275 niños, niñas y adolescentes menos afectados en 2030.

Tabla 3. Proyección de la evolución de las situaciones de desprotección entre las personas de 0-17 años. Álava, 2023-2030

	2023	2030 (N) / ΔN
Riesgo o desprotección leve o moderada	2,757%	1.407 / -163
Desprotección grave	2,031%	1.036 / -113
Total	4,790%	2.443 / -276

Fuentes: Instituto Foral de Bienestar Social (IFBS). INE. Estadística Continua de Población a 01/01/2024; INE. Proyecciones demográficas 2024-2074. Nota: la prevalencia se calcula sobre la población de 0 a 17 años; la proyección se basa en un supuesto de prevalencia constante.

En cuanto a la violencia machista, en 2023 se estima que el 0,488% de las mujeres de Álava (841 en total) fueron víctimas de algún delito de este tipo, predominando los relacionados con la pareja o expareja (71,8%). Desde 2019, los casos han aumentado un 19,5%, con un incremento especialmente notable en los delitos contra la libertad sexual (+67,3%). La cifra real es difícil de estimar por las limitaciones de los registros, y la situación de las mujeres migrantes y refugiadas —especialmente vulnerables y en aumento según las proyecciones demográficas— introduce un factor adicional de incertidumbre. Bajo un escenario conservador de prevalencias constantes, se prevé un ligero aumento hasta unas 880 mujeres víctimas en 2030.

⁶ Se incluyen situaciones de absentismo o retraso escolar de 2 o más años, problemas graves de integración en la escuela, problemas de comportamiento o actitud y problemas leves de desatención, rechazo familiar, maltrato, acoso o violencia.

Tabla 4. Proyección de la evolución de la prevalencia de la violencia machista. Álava, 2023-2030

	2023	2030 (N) / ΔN
Violencia machista	0,488%	841 / +40

Fuentes: Ertzaintza. Estadísticas delictivas. INE. Estadística Continua de Población a 01/01/2024; INE. Proyecciones demográficas 2024-2074.
Nota: la prevalencia se calcula sobre el conjunto de la población femenina; la proyección se basa en un supuesto de prevalencia constante.

Situaciones de exclusión social y riesgo de exclusión social

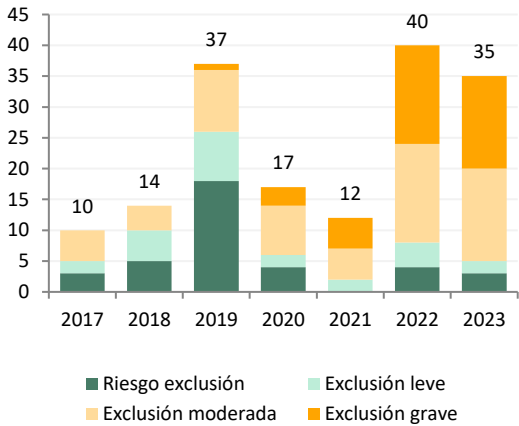
Dada la complejidad de los factores que intervienen en la exclusión social, el análisis se ha apoyado en dos dimensiones clave: pobreza y desigualdad, por un lado, y exclusión residencial, por otro.

Aunque los indicadores económicos muestran una mejora respecto a 2018 — impulsada por el aumento del SMI y la reforma laboral—, la pobreza sigue concentrándose en colectivos especialmente vulnerables, como las personas de origen extranjero, la población infantil y las familias monoparentales, que a menudo se solapan y acumulan desventajas.

En paralelo, la exclusión residencial ha ganado peso como factor de riesgo. Aumentan las situaciones de vivienda insegura e inadecuada en la CAPV, y aunque el incremento de la exclusión residencial grave ha sido moderado en Álava, se observan cambios en su composición, con más personas en calle y un perfil local diferenciado por una mayor presencia femenina y una menor proporción de población extranjera.

Tomando como referencia las resoluciones del Servicio de Valoración y Diagnóstico de la Exclusión Social, la prevalencia actual de riesgo o exclusión social en Álava es del 0,080% (165 casos). Si esta tasa se mantiene, en 2030 se estiman unas 170 personas en esta situación. Sin embargo, la previsión de mayores flujos migratorios —y la elevada vulnerabilidad asociada a este colectivo— sugiere que la prevalencia real podría ser superior, especialmente si persisten las dificultades de acceso a la vivienda y las desigualdades económicas.

Gráfico 1. Número y distribución de los dictámenes de riesgo y exclusión social. Álava 2017-2023



Fuente: Departamento de Políticas Sociales de la Diputación Foral de Araba. Memoria 2023.

La red de servicios sociales en Álava en el horizonte 2030

El II Mapa de Servicios Sociales de la CAPV establece propuestas específicas de cobertura y número de plazas para el año 2030 en relación con cada uno de los servicios y prestaciones que conforman el SVSS. Los criterios en los que se basa la planificación autonómica para establecer las coberturas objetivo de cara a 2030 son

fundamentalmente tres: en primer lugar, reorientar el sistema hacia un modelo más comunitario, con un menor peso relativo de lo residencial; en segundo lugar, fortalecer el cuidado profesionalizado frente al cuidado familiar; en tercer lugar, impulsar la convergencia de las coberturas en los tres territorios históricos, como medio para favorecer la equidad en el acceso al sistema, independientemente del lugar de residencia.

El diagnóstico realizado en el marco de la elaboración del II Mapa de Servicios Sociales del THA analiza la situación de partida de los principales servicios de la Cartera de Servicios Sociales en Álava en cuanto a su cobertura, y establece los incrementos que serían necesarios en cada servicio para alcanzar los objetivos propuestos a nivel autonómico. El documento no cuestiona la adecuación de los objetivos propuestos en el contexto alavés, ni su suficiencia para dar respuesta a las necesidades proyectadas para 2030.

El objetivo del documento es tener una fotografía de la situación actual y la evolución de plazas y personas usuarias que tendría que darse hasta 2030 para alcanzar los objetivos propuestos en el Mapa autonómico. Esta fotografía de la situación se someterá a la valoración de las instituciones alavesas en el marco de la elaboración del II Mapa de Servicios Sociales del THA, de cara a adecuar los objetivos a la realidad alavesa y las necesidades reales existentes en el Territorio.

Ámbito de la dependencia: personas mayores

En términos generales, el contraste entre la situación actual y las coberturas objetivo del Mapa autonómico revela dos patrones diferenciados:

La cobertura de los servicios vinculados con el alojamiento —residencias, apartamentos tutelados y viviendas comunitarias— supera con claridad los niveles planteados en el Mapa⁷. Por el contrario, los servicios de atención diurna (primaria y secundaria), el SAD, el servicio de apoyo a personas cuidadoras y las prestaciones económicas presentan coberturas inferiores. En su caso, es importante señalar que la magnitud de la brecha respecto a los niveles previstos por el Mapa varía de manera significativa de un servicio o prestación a otro.

En el caso del SAD (1.2), el servicio de atención diurna de atención primaria (1.7.1), y la PECEF (3.2.1), los niveles de cobertura actuales resultan más próximos a las referencias establecidas por el Mapa autonómico. En cambio, el servicio de día correspondiente a la atención secundaria (2.2.1.1), el servicio de apoyo a personas cuidadoras (1.4) y, sobre todo, la PEAP (3.1.1), presentan una cobertura notablemente más baja.

⁷ Es importante matizar que la situación favorable que presentan los servicios relacionados con el alojamiento se atribuye, en buena medida, al importante número de Prestaciones Económicas Vinculadas al Servicio (PEVS) que se conceden. En el caso de los centros residenciales para personas mayores (2.4.1), por ejemplo, representan el 48% de la dotación total.

Tabla 5. Cobertura actual, proyectada y estimación de recursos adicionales necesarios^[1]. Ámbito de la dependencia. 2023-2030

	N (cobertura)		Plazas/ usuarias adicionales
	2023	2030	
SAD (1.2) [Horas]	853.550 (11,52 ^[2])	1.101.572 (11,17 ^[2])	+248.022
Sº personas cuidadoras (1.4) [usuarias/año]	463 (0,625%)	773 (0,854%)	+310
CD mayores (1.7.1) [Plazas]	361 (0,488%)	444 (0,491%)	+83
Alojamiento de mayores (1.9.3, 1.9.4) [Plazas + PEVS]	520 (0,702%)	558 (0,617%)	+38
CD mayores dependencia (2.2.1.1) [Plazas + PEVS]	545 (0,736%)	890 (0,983%)	+345
Residencias mayores (2.4.1) [Plazas+ PEVS]	2.316 (3,128%)	2.316 (2,559%)	0
PEAP (3.1.1) [perceptoras]	474 (0,640%)	1.752 (1,936%)	+1.278
PECEF (3.2.1) [perceptoras]	3.777 (5,101%)	4.791 (5,294%)	+1.014

Notas: [1] Para alcanzar las coberturas del Mapa autonómico. [2] Se calcula en horas por 100 habitantes de 65 y más años.

Ámbito de la dependencia: discapacidad

Para los servicios y prestaciones económicas del ámbito de la dependencia, como se ha analizado en el apartado anterior, la dotación de recursos adicionales proyectada para 2030 responde fundamentalmente al crecimiento previsto de la población destinataria (personas de 65 años o más). En cambio, en el caso de los servicios orientados a abordar las necesidades vinculadas con la discapacidad, según las proyecciones demográficas de referencia, la evolución de la población destinataria no será un factor tan determinante.

En este caso, las necesidades adicionales de plazas obedecen a una situación de partida algo más desfavorable en términos de cobertura. Tal como muestra la tabla 6, con la excepción del servicio de intervención social en atención temprana (2.7.4), ningún otro servicio considerado alcanza la cobertura objetivo planteada por el II Mapa de la CAPV para 2030.

Tabla 6. Cobertura actual, proyectada y estimación de recursos adicionales necesarios^[1]. Ámbito de la discapacidad. 2023-2030

	N (cobertura)		Plazas/ usuarias adicionales
	2023	2030	
CD discapacidad (2.2.1.2 / 2.2.1.3) [Plazas]	133 (0,066%)	222 (0,113%)	+89
CD enfermedad mental crónica (2.2.1.4) [Plazas]	30 (0,015%)	63 (0,032%)	+33
CO (2.2.2) [Plazas]	445 (0,219%)	476 (0,243%)	+31
Residencias discapacidad (2.4.2) [Plazas]	294 (0,145%)	335 (0,171%)	+41
Residencias enfermedad mental (2.4.3) [Plazas]	173 (0,085%)	190 (0,097%)	+17
Sº intervención atención temprana (2.7.4) [Usuarios/año]	1.141 (5,969%)	1.000 (5,291%)	-141

Nota: [1] Para alcanzar las coberturas del Mapa autonómico.

Cabe señalar que la brecha de cobertura es particularmente relevante en las dos modalidades existentes del servicio de día —discapacidad (2.2.1.2) y enfermedad mental (2.2.1.3)—. En contraste, el servicio ocupacional (2.2.2) y los centros residenciales para personas con discapacidad (2.4.2) y enfermedad mental (2.4.3) presentan una cobertura más alta, alcanzando entre el 85% y 90% de los

niveles propuestos en el Mapa autonómico, en función del servicio.

Ámbito de la desprotección: infancia y violencia machista

Los datos del diagnóstico realizado revelan que los niveles de cobertura que presentan los servicios de protección en Álava resultan superiores o prácticamente equivalentes a los que establece el II Mapa de Servicios Sociales de la CAPV para 2030. En consecuencia, para alcanzar esos niveles de cobertura en 2030 no se anticipan grandes incrementos para estos servicios, más allá de ajustes menores.

En cualquier caso, conviene no pasar por alto que las previsiones que realiza el Mapa de la CAPV se basan en proyecciones poblacionales que anticipan una contracción de la población menor de edad en Álava, lo que reduce las estimaciones de plazas o personas usuarias que se requerirán en 2030. En contraposición, el propio diagnóstico muestra una evolución al alza de las situaciones de desprotección tanto infantil como de mujeres, lo que podría dar lugar a una mayor necesidad de recursos que la prevista en el Mapa autonómico.

Tabla 7. Cobertura actual, proyectada y estimación de recursos adicionales necesarios^[1]. Ámbito de la desprotección. 2023-2030

	N (cobertura)		Plazas/ usuarias adicionales
	2023	2030	
Sº intervención (1.3) [Desprotección] [Usuaris/año]	3.073 (5,303%)	2.309 (4,340%)	-764
Piso de acogida violencia doméstica (1.9.1.2) [Plazas]	46 (0,032%)	51 (0,034%)	+5
Residencias personas menores de edad (2.4.4) [Plazas]	229 (0,395%)	228 (0,429%)	-1
Residencias para mujeres (2.4.6) [Plazas]	47 (0,033%)	25 (0,017%)	-22
Sº intervención con familias (2.7.3.1) [Usuaris/año]	837 (0,250%)	779 (0,229%)	-58
Sº acogimiento familiar (2.7.6.1) [Usuaris/año]	125 (0,037%)	143 (0,042%)	+18

Nota: [1] Para alcanzar las coberturas del Mapa autonómico.

Ámbito de la inclusión social

En lo que respecta a los servicios dirigidos a la población en riesgo o situación de exclusión social, en líneas generales se observa un mayor grado de implantación de los servicios de atención primaria, mientras que los servicios correspondientes a la atención secundaria presentan una cobertura ciertamente limitada en comparación con las propuestas del Mapa autonómico.

Para ajustar las coberturas actuales a los niveles propuestos por el Mapa autonómico en el horizonte de 2030, la dotación adicional de recursos proyectada incluye 78 plazas de centro de día para la inclusión (2.2.3) y 64 plazas residenciales (2.4.5), además de un centro de noche (2.3.2), que actualmente no existe en el territorio. En contraste, como revela la siguiente tabla, los déficits en los servicios de atención primaria para la inclusión social son más reducidos, observándose varios servicios cuya dotación actual ya superaría la provisión necesaria para alcanzar las metas de cobertura planteadas en el Mapa autonómico. En todo caso, existen indicios de que algunos servicios —los pisos de acogida para urgencias sociales, por ejemplo— podrían estar operando al límite de su capacidad.

Tabla 8. Cobertura actual, proyectada y estimación de recursos adicionales necesarios^[1]. Ámbito de la exclusión social. 2023-2030

	N (cobertura)		Plazas/ usuarias adicionales
	2023	2030	
Sº intervención (1.3) [Exclusión] [Usuarias/año]	3.102 (1,120%)	2.472 (0,863%)	+630
CD exclusión (1.7.2) [Plazas]	70 (0,035%)	88 (0,045%)	-18
Acogida nocturna (1.8) [Plazas]	115 (0,042%)	117 (0,041%)	-2
Piso urgencia social (1.9.1.1) [Plazas]	42 (0,015%)	64 (0,022%)	-22
Vivienda tutelada exclusión (1.9.2) [Plazas]	151 (0,074%)	135 (0,069%)	+16
CD para inclusión social (2.2.3) [Plazas]	0 (0,000%)	78 (0,040%)	-78
Residencias exclusión (2.4.5) [Plazas]	14 (0,005%)	78 (0,027%)	-64

Nota: [1] Para alcanzar las coberturas del Mapa autonómico.

Servicios transversales

Finalmente, en relación con los servicios que el Mapa autonómico clasifica como servicios transversales, cabe destacar la buena posición relativa de Álava en relación con la ratio de personal de los servicios sociales de base, como puerta de entrada al sistema. Actualmente, Álava cuenta con un total de 149,9 profesionales (trabajadores/as sociales y personal administrativo) a dedicación plena equivalente, una dotación notablemente superior a la establecida en el Mapa autonómico (que obedece fundamentalmente al criterio de convergencia respecto a los otros territorios históricos, que cuentan con menor dotación en este servicio).

Tabla 9. Cobertura actual, proyectada y estimación de recursos adicionales necesarios^[1]. Servicios transversales. 2023-2030

	N (cobertura)		Plazas/ usuarias adicionales
	2023	2030	
S.S.B. (1.1) [Nº TS y admin. a DPE]	149,9 (0,447‰)	120,3 (0,354‰)	-29,6
Sº personas cuidadoras (1.4) [personas usuarias]	463 (0,625%)	773 (0,854%)	+310
Sº valoración (...) (2.1) [Pax. valoradas año]	4.604 (1,375%)	8.348 (2,457%)	+3.744
Sº urgencias sociales (2.6) [Usu/año]	2.934 (0,876%)	2.955 (0,870%)	+21
Sº ayudas técnicas (...) (2.7.2.2) [Usu/año]	1.132 (0,338%)	626 (0,184%)	-506
Sº de tutela (2.7.2.3) [Usu/año]	419 (0,151%)	390 (0,136%)	-29
Sº transporte adaptado (2.7.2.4) [Usu/año]	1.177 (0,351%)	779 (0,229%)	-398
Ayudas autonomía personal (3.3) [Ayudas/año]	175 (0,236%)	635 (0,702%)	+460

Nota: [1] Para alcanzar las coberturas del Mapa autonómico.

Los mayores incrementos estimados en este ámbito corresponden a los servicios de valoración y diagnóstico (algo más de 3.700 personas adicionales valoradas en 2030), lo que resulta coherente con los incrementos de cobertura previstos en el resto de los servicios. También se prevé la necesidad de un incremento moderado en el servicio de apoyo a personas cuidadoras (310 personas adicionales atendidas) y en las ayudas para la adquisición de productos de apoyo (460 beneficiarias adicionales).

Consideraciones finales

El diagnóstico del sistema de servicios sociales de Álava ofrece una lectura estructurada y comparable del grado de alineación del territorio con los objetivos estratégicos de la CAPV, utilizando criterios homogéneos y transparentes. Su principal aportación no reside en la identificación directa de necesidades sociales, sino en proporcionar una base técnica sólida para la toma de decisiones en el proceso de elaboración del II Mapa del THA, actualmente en marcha, facilitando la priorización, la secuenciación temporal y la adaptación territorial de los objetivos autonómicos. En este sentido, el diagnóstico no pretende establecer un dimensionamiento definitivo de los recursos necesarios, sino ofrecer una base analítica común para el debate interinstitucional que se desarrollará en el marco de la elaboración del II Mapa de Servicios Sociales del Territorio Histórico de Álava.

A FONDO | SAKONEAN

Nolako etorkizuna aurreikusten dute Arabako gazteek?

Funtsezkoa da gazteen egoera eta etorkizuneko itxaropenak ezagutzea, talde hori baita edozein gizarteren garapen sozial, ekonomiko eta kulturalaren eragilea. Haien benetako baldintzak identifikatzean —hala nola hezkuntzarako sarbidea, enplegua, osasun mentala edo parte-hartze komunitarioa—, beren premiei modu eraginkorrean erantzungo dieten politika publikoak diseina daitezke, gizarte-arazoak prebenitu daitezke, hala nola bazterkeria edo langabezia, eta desberdintasun-arrakalak hauteman daitezke, eta, horiek landu ezean, berriz, denboran zehar sakondu litezke. Gainera, zer erronkei aurre egin behar dieten eta zer asmo dituzten ulertzeak aukera ematen du lan-merkatuan eraldaketak aurreikusteko, hezkuntza-sistemak egokitzeko eta baliabide publikoak modu iraunkorrean planifikatzeko.

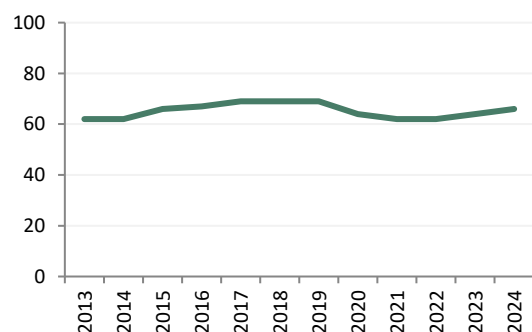
Halaber, gazteen itxaropenak ezagutzeak gizarte-kohesioa eta bizitza demokratikoa sendotzen laguntzen du, gazteek beren etorkizuna eraikitzen aktiboki parte har dezaten sustatzen baitu. Haien balioak eta kezak ulertzeak funtsezko informazioa ematen du inbertsioak bideratzeko, lurralde- eta gizarte-plangintza hobetzeko eta garapen-aukerak bidezkoak direla bermatzeko. Laburbilduz, gazteen errealitatea aztertzea, egungo eskariei erantzuteko erabilgarri izateaz gain, etorkizun bidezkoagoa, lehiakorragoa eta iraunkorragoa eraikitzeko tresna estrategikoa ere bada.

Alderdi horiek aztertzeko, jarraian aurkezten den artikulua gazteen itxaropenei buruzko adierazleen hautaketa bat jasotzen du, Gazteen Euskal Behatokiak bere [Aurrera Begira](#) argitalpenean biltzen dituenak, gazteen egungo egoerari buruz eta haien etorkizuneko itxaropenetan eragina duten faktoreei buruzko ikuspegi osatua emateko helburuarekin. Adierazle hauek Euskadiko 15 eta 29 urte bitarteko gazteei egindako inkestan oinarrituta daude.

Egungo egoeraren pertzepzio positiboa

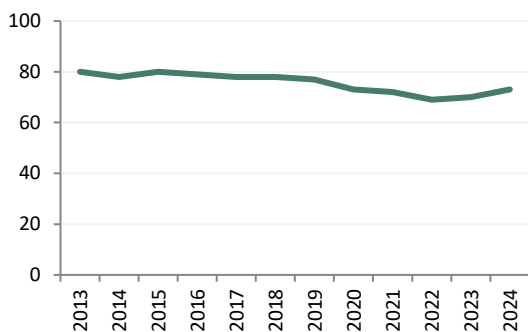
Egungo egoeraren balorazio orokorrari dagokionez —egoera pertsonala, gazteriarena eta, oro har, Euskadikoa barne—, Arabako gazteek 66ko batez besteko puntuazioa ematen diote 100etik. Pertzepzio hori nahiko egonkor mantendu da 2013az geroztik, 60 eta 70 puntu bitarteko balioekin. Puntuazio horren egonkortasunak iradokitzen du azken hamarkadan aldaketa sozial, ekonomiko eta pertsonalak izan arren, gazte arabarren balorazio orokorrak ez duela aldaketa esanguratsurik izan, eta baikortasun apal batean mantendu dela.

1. grafikoa. Egoeraren balorazio indizearen bilakaera (0-100). Araba 2013-2024



Fokua norberaren ongizatean arreta jartzen denean, pertzepzioa zertxobait hobetzen da: 2024ean, Arabako gazteek 100etik 73ko batez besteko puntuazioa eman diote beren egoerari. Hala ere, komeni da zehaztea balorazio horrek pixka bat okerrera egin duela 2013 eta 2022 bitartean, nahiz eta azken urteetan joera leheneratu egin den, eta datuek pertzepzio positiboa pixkanaka berreskuratzen ari dela adierazten duten.

2. grafikoa. Norberaren ongizate indizearen bilakaera (0-100). Araba 2013-2024



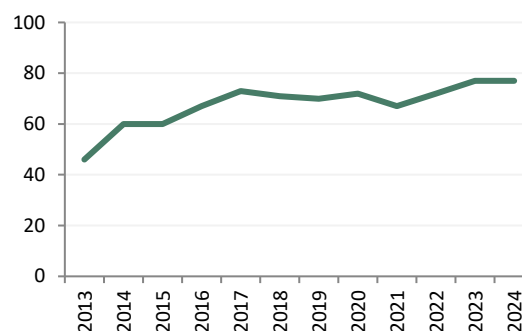
Konfiantza eta ziurgabetasuna gazteen lan-etorkizunean

Gazteek epe laburrera begira dituzten aurreikuspenak ezagutzeko funtsezko gaitako bat enplegua da. Ildo horretan, ikasketak amaitutakoan egiten ari diren ikasketekin lotutako lan bat aurkitzeko duten ikuspegiaz galdetu zaie gazteei.

Arabako ikasleen %77k uste du, prestakuntza amaitzean, ikasitakoarekin bat datorren enplegua lortuko duela. Datu horrek erakusten du konfiantza handia dutela gazteek ikasketen balioan eta laneratzeko orduan ematen dituen aukeretan.

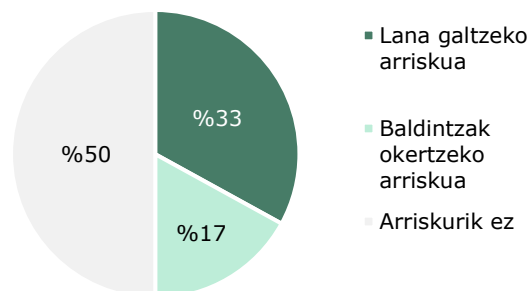
Gainera, azken hamarkadan ehuneko hori etengabe hazi da, eta horrek argi adierazten du baikortasuna nagusi dela etorkizun profesionalari dagokionean.

3. grafikoa. Prestakuntzari lotutako lana izatea aurreikusten duten ikasleen ehunekoaren bilakaera (%). Araba 2013-2024



Bestalde, lana galtzeko edo lan-baldintzak okertzeko arriskuaren pertzepzioa ere aztertzen du inkesta honek. Arlo horretan, emaitzak ez dira hain baikorrak, inkestari erantzun dioten gazteen erdiak uste baitute urtebeteko epean oso edo nahiko litekeena dela lana galtzea edo beren lan-baldintzak okertzea.

4. grafikoa. Lana galtzeko edo baldintzak okertzeko arriskuaren arabarako gazte langileen banaketa (%). Araba, 2024



Laneko zaugarritasunaren pertzepzio horrek ezegonkortasunak eta ziurgabetasunak markatutako egoera erakusten du, batez ere dagoeneko lanean ari direnen artean. Etorkizuneko laneratzeari buruzko itxaropen baikorrek eta egungo enpleguekiko zaugarritasun-sentsazio handiak agerian uzten dute prekarietatearen egiturazko faktoreen iraunkortasuna, bai eta gazteen enpleguaren egonkortasuna eta kalitatea indartuko duten politiken beharra ere.

Bilakaerari buruzko datuek erakusten dutenez, 2016 eta 2018 artean behera egin ondoren, pertzepzio hau nahiko egonkor mantendu da ondorengo urteetan. Lan-baldintzek okerrera egin dezaketela uste duten gazteen ehunekoan ikusten da aldaketarik nabarmenena, eta horrek enpleguaren kalitatearekiko eta egonkortasunarekiko kezka gero eta handiagoa dela adierazten du.

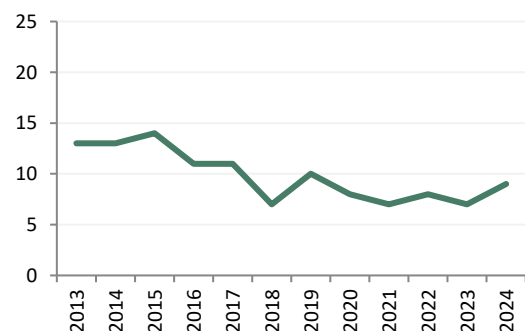
5. grafikoa. Lana galtzeko edo baldintzak okertzeko arriskua aurreikusten duten gazte langileen ehunekoaren bilakaera (%). Araba 2016-2024



Enplegua galtzeko edo lan-baldintzak okertzeko arriskuaren pertzepzioa oso lotuta dago etorkizunean gazte batzuek atzerrira lan egiteko emigratu behar izatearen ideiarekin, nahiz eta hori nahi ez izan. Gazteek beren ingurune hurbilean ezegonkortasuna, prekarietatea edo lan-aukerarik eza sumatzen dutenean, areagotu egiten da zaugarritasun-sentsazioa, eta, horrekin batera, lurraldetik kanpo alternatibak bilatzeko aukera.

Arabako gazteen kasuan, etorkizunean lan egiteko atzerrira joan beharko dutela uste dutenen proportzioa nahiko txikia da. Soilik %9k adierazten du aurreikuspen hori, eta, beraz, gehienek uste dute beren ibilbide profesionala lurraldean garatu ahal izango dutela. Datu horrek iradokitzen duenez, nahiz eta lanarekiko ezegonkortasuna bizi, gazte arabarrek ez dute emigrazio behartua premia orokortzat jotzen, eta horrek zerikusia izan dezake lan-adierazle batzuen azken aldiko hobekuntzarekin edo beren prestakuntzara egokitutako enpleguak aurkitzeko itxaropenarekin.

6. grafikoa. Derrigorrez emigratu beharra aurreikusten duten gazteen ehunekoaren bilakaera (%). Araba 2013-2024



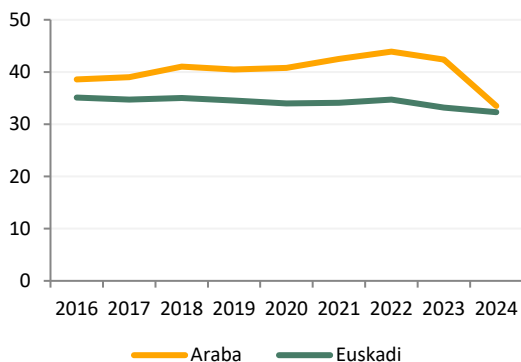
Emantzipatzeko zailtasunak

Gazteek etorkizunari begira dituzten aurreikuspenen beste funtsezko alderdietako bat etxebizitza da. Etxebizitza bizitzeko leku bat baino askoz gehiago da, autonomia pertsonal eta ekonomikoa adierazten baitu, helduarorako trantsizioa, eta norberaren erantzukizunak kudeatzeko gaitasuna markatzen baititu.

Azken datuen arabera, 18 eta 34 urte bitarteko gazteen herena soilik bizi da familia-etxebizitzatik kanpo. Araban, gazteen emantzipazio-maila Euskadiko batez bestekoa baino altuago izan den arren, 2024an gainerako lurraldeetakoaren pare ipini da.

Ehuneko hori [Gazteen emantzipazioa laguntzeko 2030 Euskal Estrategian](#) ezarritako helburuetatik urrun dago oraindik. Izan ere, estrategia honek asmo handiko xedeak finkatzen ditu: 25-29 urtekoen artean emantzipazio-tasa pixkana %50 inguruan kokatzea, eta 30-34 urtekoen taldean %75 inguruan.

7. grafikoa. Emantzipazio-tasaren bilakaera (%). Araba eta Euskadi, 2016-2024



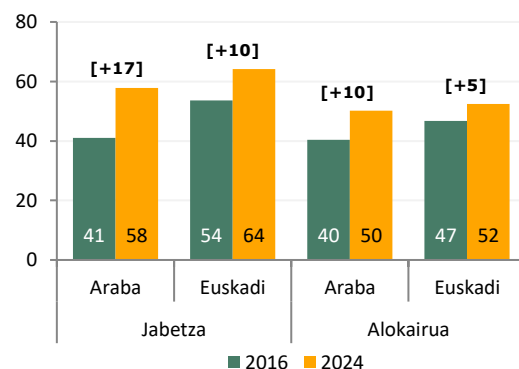
Iturria: Gazteen Euskal Behatokia, Eustaten Biztanleria jardueraren arabera sailkatzeko inkestaren datuetan oinarrituta.

Emantzipatzeko zailtasunak lotura estua du etxebizitzaren garestitzearekin, eta fenomeno honek behartzen ditu gazteak beren diru-sarreraren gero eta proportzio handiagoa etxebizitzaren erosketa edo alokairura bideratzera. Gehiegizko ahalegin ekonomiko hau oztopo zuzena da familia-etxebizitza utzi eta bizimodu independentea izateko.

Araban, etxebizitza librea eskuratzeko kostua –jabetzan zein alokairuan– Euskadi osokoa baino apalagoa izan da historikoki. Hala ere, azken urteetan, Arabako lurraldean kostu honek hazkunde nabarmenagoa izan du EAEko batez bestekoaren aldean.

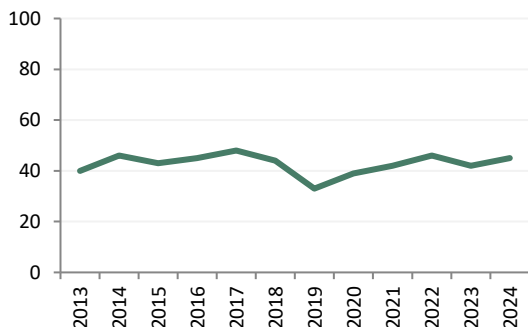
Nolanahi ere, gazteek etxebizitza eskuratzeko egin behar duten ahalegin ekonomikoak nabarmen gaitzen ditu [Etxebizitza eskubideari buruzko maiatzaren 24ko 12/2023 Legea](#) definitutako eskuragarritasun-parametroak. Araudi horrek ezartzen du finantza-ahaleginak ez lukeela gaititu behar bizikidetzak-unitatearen diru-sarreraren %30.

8. grafikoa. Etxebizitza librea jabetzan hartzearen eta alokatzearen kostuaren bilakaera (%). Araba, 2016/2024



Datu hauek zuzeneko eragina dute emantzipatu ezingo direla aurreikusten duen gazteen proportzioan ere. 15 eta 29 urte bitarteko gazteen %45k uste du urtebeteko epean ezin izango duela bere emantzipazio-proiektua gauzatu. Talde horretan sartzen dira bai gurasoen etxea utzi nahi baina bideragarria ikusten ez dutenak, bai, beren kabuz bizi arren, beren borondatearen aurka familia-etxebizitzara itzuli behar izatearen beldur direnak. Emantzipatzeko aukerarekiko konfiantzarik ez izateak agerian uzten du ekonomiari eta etxebizitzari loturiko zailtasunek zuzeneko eragina dutela gazteen bizi-proiektuan eta etorkizunari buruzko pertzepzioan.

9. grafikoa. Familia-etxebizitzara itzuli beharra aurreikusten duten gazteen ehunekoaren bilakaera (%). Araba 2013-2024

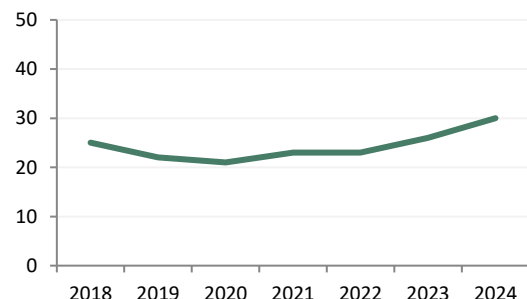


Amatasuna eta aitatasunaren atzerapena

Gazte askoren bizi-planen mugarrietako bat ama edo aita izateko asmoa da. Hala ere, lan-ezegonkortasuna eta emantzipatzeko zailtasun gero eta handiagoak proiektu hau atzeratzen ari dira nabarmen.

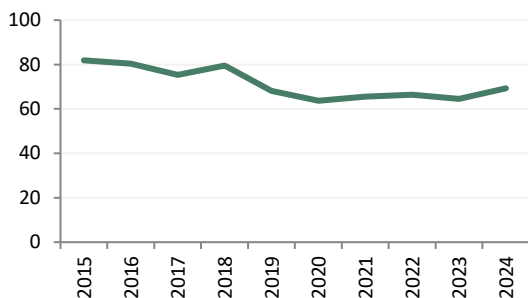
Seme-alabak izan nahi dituzten gazte arabarren %30ak pentsatzen du ez dituztela izango nahi duten adinean. Desioaren eta benetako aukeren arteko alde horrek lotura estua du aurrez aipatutako lan-prekarietatearekin, ziurgabetasun ekonomikoarekin eta etxebizitza lortzeko zailtasunekin. Baldintza materialek laguntzen ez dutenean, gazte askok atzeratu beharreko proiektutzat hartzen dute amatasuna edo aitatasuna, eta horrek zuzenean eragiten dio ugalkortasun adinari, eta honek berriz eragin nabarmena du populazioaren zahartzean.

10. grafikoa. Amatasun eta aitatasun atzeratuaren indizearen bilakaera (%). Araba 2018-2024



Azken urteetan amatasuna eta aitatasuna atzeratzeko joera indartu egin bada ere, familia bat osatzeko gogoia nagusi da gazteen artean; 15-29 urte bitarteko 10 pertsonatik 7k adierazten dute bizitzako unerik batean seme-alabak izatea gustatuko litzaiekeela. Errealitate horrek erakusten du atzerapena ez dela interesik ezaren ondorio, baizik eta egiturazko zailtasunena, horiek baldintzatzen baitute funtsean ama edo aita izateko egokitzat jotzen duten adinetan seme-alabak izateko aukera.

11. grafikoa. Seme-alabak izan nahi dituzten gazteen ehunekoaren bilakaera (%). Araba 2015-2024

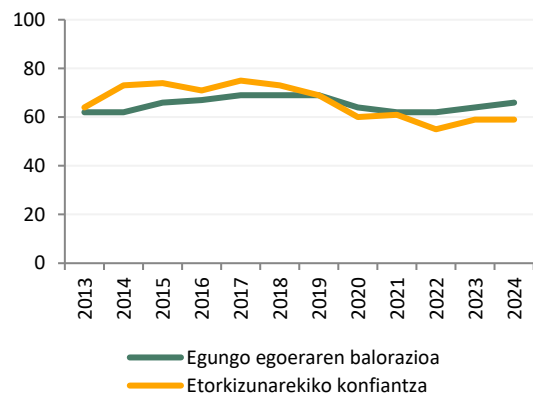


Etorkizunarekiko konfiantza mugatua

Amaitzeko, Gazteen Euskal Behatokiaren inkestak etorkizuneko aurreikuspenak ezagutzeko galdera orokor bat jasotzen du. Bertan, 15 eta 29 urte bitarteko pertsonei eskatzen zaie, bost urteko epean, beren egoera pertsonalari, gazteen egoerari eta oro har Euskadiren egoerari dagokienez zein konfiantza-maila duten baloratzeko. Epe ertaineko begirada horrek aukera ematen du haien etorkizuna eta ingurukoena nola hautematen duten ezagutzeko, eta funtsezko ikuspegia eskaintzen du, haien nahiak ez ezik, haien itxaropenak baldintzatzen dituzten ziurgabetasunak eta erronkak ere ulertzeko.

2024an, gazte arabarrek 100etik 59ko puntuazioa eman diote etorkizunarekiko duten konfiantzari, eta balio horrek neurrizko baikortasun-maila erakusten du. 2017az geroztik, balorazio horrek beheranzko joera izan du, eta 2019tik aurrera, aldaketa nabarmena ikusten da. Izan ere, gazteek hobeto baloratzen dute beren egungo egoera epe ertainerako dituzten itxaropenak baino. Orainaren eta etorkizunaren arteko arrakala horrek agerian uzten du ziurgabetasuna areagotu egin dela, eta egiturazko erronkek –hala nola lan-ezegonkortasunak, etxebizitza eskuratzeko zailtasunak edo bizitzaren kostuak oro har– etorkizun hobearen aurreikustea zailtzen dutela.

12. grafikoa. Etorkizunarekiko konfiantza eta egungo egoeraren balorazioaren bilakaera (0-100). Araba 2013-2024



A FONDO | SAKONEAN

Cómo medir la ruralidad: indicadores para aproximarse a la caracterización del entorno rural

La ruralidad no se mide con un único indicador universal, sino que se evalúa mediante la combinación de criterios demográficos, territoriales, económicos y de acceso a servicios.

Uno de los criterios más utilizados es el tamaño de la población, por su facilidad de aplicación. En este sentido, la densidad poblacional permite distinguir zonas rurales extensas de áreas urbanas más concentradas, aunque presenta limitaciones a la hora de reflejar la diversidad de los entornos rurales.

El acceso a servicios e infraestructuras como hospitales o centros educativos, junto con el tiempo de desplazamiento a los centros urbanos, es otro indicador frecuentemente utilizado, que permite la diferenciación entre una ruralidad remota y una ruralidad periurbana. En los estudios socioeconómicos, se suele utilizar también el predominio del sector primario, frente al industrial o el de servicios.

Existen, también, índices compuestos de ruralidad que integran múltiples variables y ofrecen una visión más completa y precisa del fenómeno, aunque su aplicación requiere una mayor disponibilidad de datos.

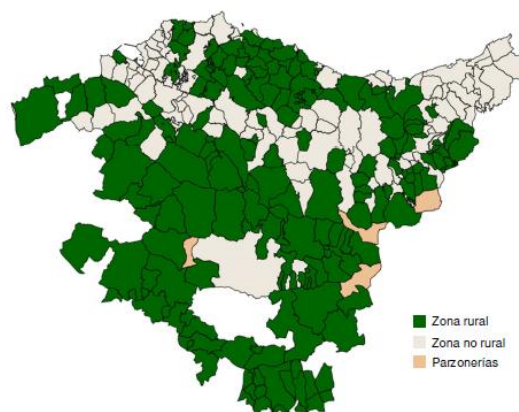
Este artículo pretende realizar una aproximación a las distintas formas de medición de la ruralidad y su aplicación al contexto territorial de Álava y de Euskadi.

Caracterización de las zonas rurales de Euskadi

Como punto de partida, encontramos el [Informe sobre la caracterización del medio rural de la CAPV](#), un documento elaborado por la Fundación HAZI, cuyo objetivo es proporcionar una base sólida, actualizada y detallada sobre las características del medio rural vasco, con el fin de apoyar la planificación, la toma de decisiones y la implementación de políticas públicas orientadas al desarrollo rural sostenible.

Según este informe, Álava presenta un carácter marcadamente rural: el 18,5% de su población reside en municipios con una densidad inferior a 150 habitantes por kilómetro cuadrado⁸ y todos sus municipios, salvo tres –Vitoria-Gasteiz, Llodio y Amurrio, tienen consideración de rurales.

Mapa 1. Clasificación a nivel municipal de zonas rurales según criterios OCDE



⁸ La OCDE clasifica como "zona rural" todas aquellas localidades con densidad de población menor a 150 habitantes por kilómetro cuadrado.

Según esta clasificación, el 94% de los municipios alaveses se consideran zonas rurales, lo que convierte a Álava en el territorio con mayor peso rural en el conjunto de la CAE, muy por encima de Bizkaia (54%) y Gipuzkoa (49%).

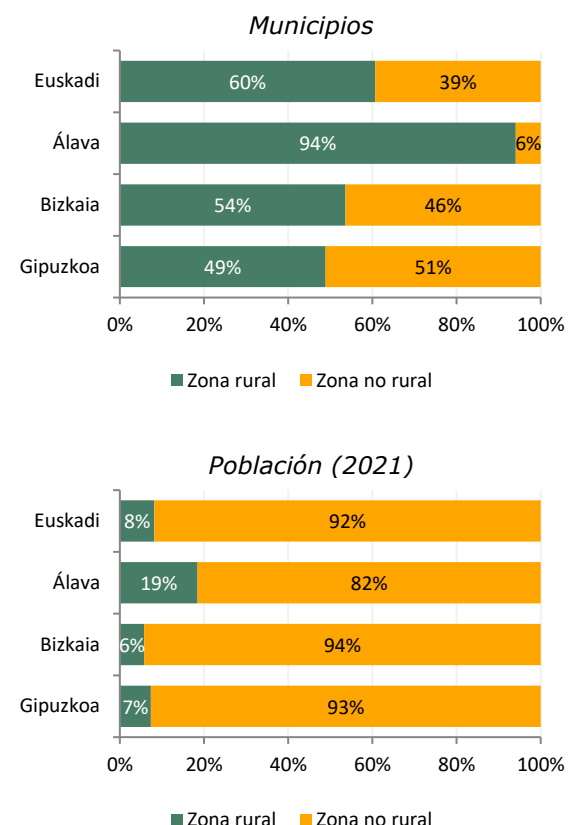
Esta diferencia no solo se manifiesta en el número de municipios, sino también en la distribución de la población. Tal y como se ha mencionado anteriormente, cerca del 19% de la población alavesa reside en municipios rurales, una proporción significativamente mayor a la registrada en Bizkaia (6%) y Gipuzkoa (7%). Estos datos evidencian una estructura territorial y demográfica más dispersa, así como una mayor relevancia del medio rural en la configuración social y económica del territorio alavés.

No obstante, la clasificación propuesta por la OCDE presenta ciertas limitaciones para describir de manera precisa el espacio rural, ya que se apoya en una única variable que difícilmente puede captar la complejidad y diversidad inherentes al concepto de ruralidad.

Por ello, la Fundación HAZI plantea una metodología que desagrega los municipios en entidades singulares de población, atendiendo a dos criterios principales:

- Entidades con 2.000 habitantes o menos, umbral que se considera representativo de la frontera entre los ámbitos rural y urbano.
- Entidades con más de 2.000 habitantes que, no obstante, presentan un Valor Añadido Bruto (VAB) del sector agrario –excluida la pesca– igual o superior al 3% del total.

Gráfico 1. Distribución de municipios y población según clasificación OCDE, por Territorio Histórico



La aplicación de esta metodología da lugar a una ampliación significativa del ámbito rural, tanto en términos territoriales como demográficos. Como consecuencia, aumenta el número de zonas identificadas como rurales, así como la proporción de población que reside en ellas, ofreciendo una imagen más fiel y matizada de la realidad rural. Este enfoque permite visibilizar espacios y dinámicas que quedarían excluidos con clasificaciones más restrictivas, y resulta especialmente útil para el diseño de políticas públicas ajustadas a la diversidad y complejidad del medio rural.

Zonas de Especial Atención

Dentro del conjunto de zonas rurales hay algunas áreas que presentan mayores niveles de vulnerabilidad, denominadas Zonas de Especial Atención, con el fin de priorizar la intervención pública y la asignación de recursos.

Para ello, se define un indicador compuesto, elaborado a partir de un conjunto de variables sociodemográficas y económicas, cuyo objetivo es detectar y delimitar los territorios rurales con mayores dificultades estructurales.

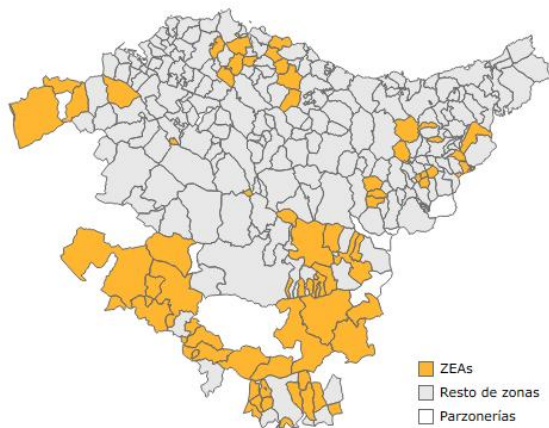
Tabla 1. Variables consideradas para la identificación de Zonas de Especial Atención

Variable	Descripción
Variación decenal de la población	El seguimiento del crecimiento y cambio de la población facilita la planificación y distribución eficiente de recursos, asegurando que se cubran las necesidades de la comunidad, además de permitir detectar desigualdades en el acceso a servicios y oportunidades. De igual manera, analizar las variaciones demográficas ayuda a evaluar el atractivo de las zonas rurales como lugar de residencia, en el sentido de que las áreas que experimentan una disminución significativa de población pueden percibirse como menos atractivas.
Tasa de masculinidad	Este indicador permite detectar desigualdades de género dentro de una población. Una proporción de hombres demasiado alta o baja puede indicar desequilibrios en la distribución de recursos, poder y oportunidades. El ámbito rural tiende a tener más hombres que mujeres en comparación con el urbano, lo que genera efectos negativos, ya que son principalmente las mujeres quienes contribuyen a mantener la población, reducir el despoblamiento y fomentar la diversificación económica.
Tasa de envejecimiento	Se trata del porcentaje de la población mayor de 65 años. El envejecimiento de la población afecta, entre otros aspectos, al sistema de protección social. Normalmente, en las zonas rurales, la tasa de envejecimiento suele ser mayor, como consecuencia de la migración de jóvenes a las ciudades. Además, con el envejecimiento aumenta la necesidad de servicios médicos y de cuidado a largo plazo.
PIB per cápita	Esta variable mide la riqueza generada en un municipio dividido entre su población. El entorno rural suele presentar un PIB per cápita más bajo, porque predominan actividades agrícolas o actividades de baja productividad, menor acceso a servicios y oportunidades económicas limitadas.
Renta personal	La medición de la renta personal ofrece datos sobre el nivel económico y el bienestar de la población, además de permitir comparar el grado de equidad económica entre distintos territorios. Un nivel de renta más elevado suele relacionarse con un mejor acceso a servicios sanitarios, educativos, culturales, de ocio y a viviendas de mayor calidad, factores que influyen directamente en el bienestar y la calidad de vida de las personas residentes.

Fuente: elaboración propia a partir del informe *Caracterización del medio rural de la Comunidad Autónoma del País Vasco* de la Fundación HAZI.

Teniendo en cuenta las variables recogidas en la Tabla 1, un total de 61 municipios vascos, que representan el 24% del total, se clasifican como Zonas de Especial Atención, la mayoría de los cuales se localizan en Álava. En concreto, el 57% de los municipios alaveses están considerados de especial atención, según estos parámetros.

Mapa 2. Zonas de Especial Atención (ZEAs)



Calidad de vida y bienestar de la población rural

Uno de los objetivos estratégicos de la Ley 7/2022 de Desarrollo Rural es, junto con el fomento y diversificación de la actividad económica, "igualar el nivel de bienestar de la población rural vasca con el nivel de bienestar de la población urbana, así como revertir la despoblación y el envejecimiento del medio rural, como factor sustancial para cohesión social y territorial".

El marco de actuación en este ámbito del bienestar poblacional persigue, entre otros objetivos, la mejora de las infraestructuras, los servicios y los equipamientos públicos, así como la preservación del patrimonio natural, cultural e identitario.

Para medir el grado de vulnerabilidad en este ámbito se consideran los siguientes indicadores:

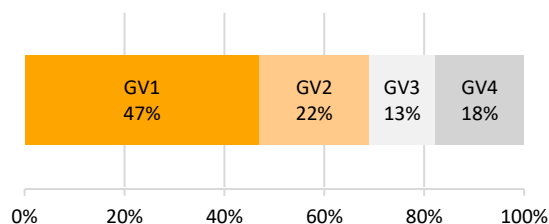
- Distancia a escuelas primarias
- Distancia a municipios de más de 10.000 habitantes
- Número de asociaciones
- Renta personal
- Porcentaje de viviendas principales
- Número de pequeños establecimientos comerciales y de restauración
- Pendiente media de la orografía
- Número de habitantes

Con el fin de analizar con mayor detalle el nivel de vulnerabilidad en este ámbito del bienestar poblacional, los territorios se desagregan en entidades singulares de población⁹. En concreto, Álava cuenta con un total de 446 entidades, de las cuales 5 son entidades urbanas, 3 son entidades urbanas en zonas rurales y 438 son entidades rurales.

A partir de los indicadores previamente mencionados, las entidades rurales en zonas urbanas muestran un bajo nivel de vulnerabilidad en lo que respecta a la calidad de vida y el bienestar. El resto de las entidades rurales se distribuyen de la siguiente manera, siendo el grado 1 el nivel máximo de vulnerabilidad y el grado 4 el mínimo: el 47% de las entidades presentan un grado 1 de vulnerabilidad, el 22% un grado 2, el 13% un grado 3 y el 18% restante un grado 4.

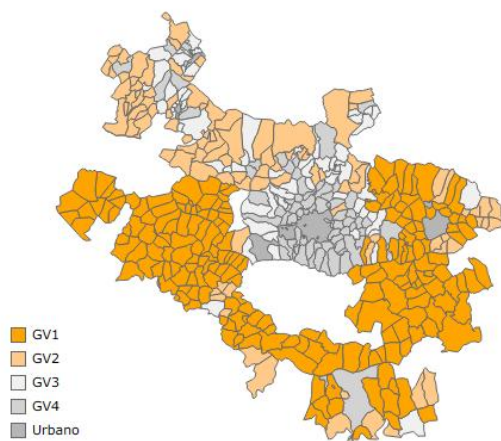
⁹ Se trata de la unidad infra municipal que Eustat define como cualquier área habitable del término municipal, habitada o excepcionalmente, deshabitada, claramente diferenciada dentro del mismo, y que es conocida por una denominación específica que la identifica sin posibilidad de confusión.

Gráfico 2. Distribución de entidades rurales de Álava según grado de vulnerabilidad en el ámbito de la calidad de vida y bienestar (GV1 máximo – GV4 máximo)



En cuanto a la distribución geográfica de las entidades, el Mapa 3 permite visualizar su localización y pone de manifiesto la concentración de la vulnerabilidad en determinadas áreas del territorio. Este análisis espacial constituye una herramienta clave para la planificación y priorización de servicios e infraestructuras, ya que facilita la identificación de necesidades específicas. De este modo, se contribuye a mejorar las oportunidades socioeconómicas de la población rural y a avanzar hacia una mayor cohesión y equidad territorial.

Mapa 3. Mapa de entidades de Álava según grado de vulnerabilidad en el ámbito de la calidad de vida y bienestar



Ruralidad y servicios sociales

La ruralidad tiene un impacto significativo en el ámbito de los servicios sociales, ya que condiciona tanto la demanda como la provisión de estos servicios. En los entornos rurales, especialmente en aquellos más dispersos o alejados de los núcleos urbanos, existen mayores dificultades de acceso derivadas de la distancia física, la escasez de transporte público y la baja densidad poblacional.

La ruralidad también influye en la disponibilidad de recursos profesionales y materiales. En muchos territorios rurales existe una menor presencia de equipamientos especializados y mayores dificultades para atraer y mantener profesionales cualificados, lo que limita la capacidad de respuesta del sistema. Como consecuencia, los servicios sociales en estos contextos suelen adoptar un carácter más generalista, con profesionales que asumen múltiples funciones y ámbitos de intervención.

Asimismo, las características demográficas propias del medio rural, como el envejecimiento de la población, la despoblación y la menor presencia de población joven, incrementan la demanda de servicios vinculados a la atención a la dependencia, el apoyo domiciliario, la prevención de la soledad no deseada y la intervención comunitaria. Estas necesidades específicas requieren modelos de atención adaptados a la realidad territorial.

En este sentido, la ruralidad condiciona los modelos de intervención social, favoreciendo enfoques basados en la proximidad, la atención domiciliaria y el trabajo comunitario y en red. La enorme densidad comunitaria que caracteriza al

entorno rural favorece el desarrollo del trabajo social relacional¹⁰. Si bien esta cercanía permite una atención más personalizada y un mayor conocimiento del contexto social, también puede plantear retos relacionados con la confidencialidad y la sobrecarga de las personas profesionales.

Por otro lado, la incorporación de herramientas digitales y servicios como la teleasistencia ofrece oportunidades para mejorar la cobertura y la accesibilidad de los servicios sociales en el medio rural. No obstante, la brecha digital y las limitaciones en la conectividad siguen siendo factores que dificultan su plena implantación.

La prestación de servicios sociales en contextos rurales suele implicar mayores costes por persona atendida y una mayor necesidad de coordinación entre distintas administraciones públicas. Todo ello pone de relieve la importancia de contar con modelos de gobernanza y financiación que tengan en cuenta la dispersión territorial y las particularidades del medio rural, con el fin de garantizar la equidad y la calidad de los servicios sociales.

A pesar de las dificultades, estudios recientes concluyen que las y los trabajadores sociales en contextos rurales se muestran satisfechas con su labor. Si bien se pone el foco en las limitaciones estructurales, se destaca la relevancia del trato personalizado y cercano que se establece con las personas usuarias.

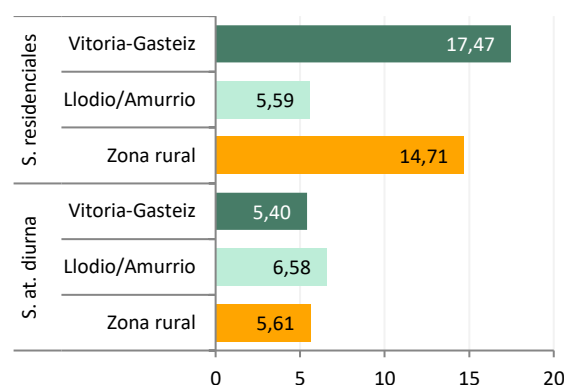
Los servicios sociales de Álava desde una perspectiva de ruralidad

Tal y como se ha señalado en el apartado dedicado a la caracterización de las zonas rurales, Álava es un territorio marcadamente rural, un rasgo que puede resultar diferencial en la provisión de los servicios sociales.

Por ello, para finalizar este artículo, se analizan las diferencias existentes en la oferta de servicios residenciales y de atención diurna, así como en la cobertura de los servicios domiciliarios y de las prestaciones económicas vinculadas a la dependencia, con el objetivo de identificar tendencias diferenciadas según el tipo de municipio.

Para llevar a cabo esta comparativa, los municipios alaveses se han agrupado en tres grandes categorías –si bien, para un conocimiento más detallado de estas diferencias, sería necesario realizar un análisis más exhaustivo–: la capital, Vitoria-Gasteiz; los otros dos grandes municipios, Llodio y Amurrio; y el resto de los municipios de carácter rural.

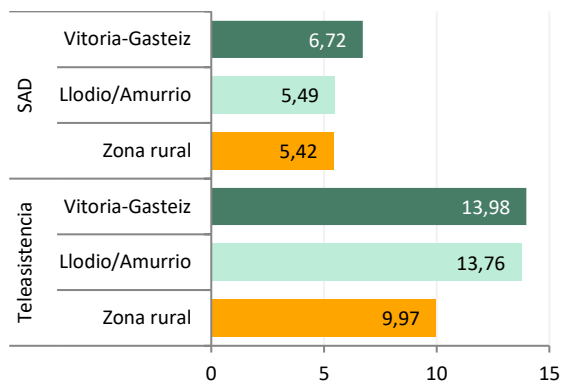
Gráfico 3. Cobertura de plazas residenciales y de atención diurna por tipo de municipio (por 1.000 habitantes). Álava, 2024



¹⁰ Gil Rodríguez, H. (2024). El Trabajo Social en el medio rural: una revisión sistemática de la literatura. *Alternativas. Cuadernos de Trabajo Social*, 31(1), 75-102. <https://doi.org/10.14198/ALTERN.2422>

Los datos recogidos en el Observatorio de Servicios Sociales de Álava indican que Vitoria-Gasteiz concentra el mayor número de plazas residenciales, con una cobertura de 17 plazas por cada 1.000 habitantes. En cambio, presenta una menor cobertura de plazas de atención diurna en comparación con el resto de las agrupaciones, si bien la diferencia es menos acusada que en el caso de la atención residencial. El dato más llamativo es la reducida oferta de plazas residenciales en Llodio y Amurrio, donde la cobertura se sitúa en apenas 5 plazas por cada 1.000 habitantes.

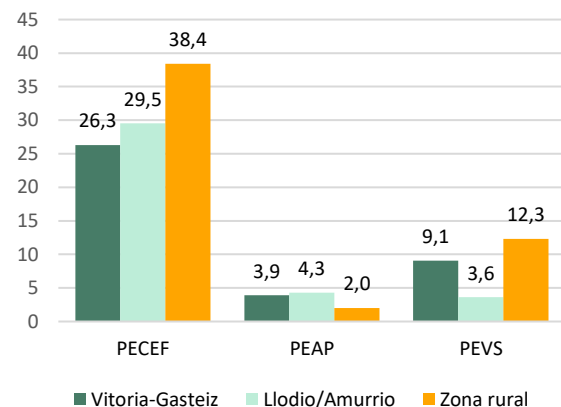
Gráfico 4. Cobertura de servicios domiciliarios por tipo de municipio (personas usuarias por cada 100 habitantes de 65 y más años). Álava, 31/12/2024



En lo que respecta a los servicios de atención domiciliaria y de teleasistencia, la capital presenta una mayor cobertura, si bien las diferencias no resultan especialmente significativas. El único aspecto destacable es que, en relación con la población mayor –principal beneficiaria de estos servicios–, el número de persona usuarias del servicio de teleasistencia es menor en el ámbito rural.

Finalmente, los datos relativos a las personas beneficiarias de prestaciones económicas vinculadas al Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia muestran una mayor cobertura en la zona rural, especialmente en el caso de la prestación para el cuidado en el entorno familiar y la vinculada al servicio.

Gráfico 5. Cobertura de las prestaciones económicas vinculadas al SAAD, según tipo de prestación y tipo de municipio (personas beneficiarias por cada 100 habitantes con dependencia reconocida). Álava, 31/12/2024



Como conclusión, se podría decir que Vitoria-Gasteiz concentra una mayor oferta de servicios de carácter estructural, especialmente en lo que respecta a las plazas residenciales, lo que refleja una provisión más intensiva de recursos especializados en el ámbito urbano. Esta mayor dotación no se reproduce en municipios de tamaño medio como Amurrio y Llodio, donde la cobertura de plazas resulta significativamente inferior.

Por otro lado, destaca el uso menor del servicio de teleasistencia en el medio rural, lo que podría estar relacionado con factores de accesibilidad, así como con pautas de demanda o preferencias en la atención.

Por último, el ámbito rural presenta una mayor cobertura de prestaciones económicas vinculadas a la dependencia, en particular aquellas destinadas al cuidado en el entorno familiar. Este patrón sugiere que, ante una menor disponibilidad de recursos estructurales, el sistema tiende a compensar mediante apoyos económicos, reforzando modelos de atención más familiar y comunitarios.

En conjunto, los datos apuntan a un modelo territorialmente diferenciado de provisión de servicios sociales, en el que los entornos urbanos concentran la oferta de servicios formales y especializados, mientras que las zonas rurales dependen en mayor medida de prestaciones económicas y de apoyos en el entorno familiar, lo que plantea retos en términos de equidad territorial y adaptación de los servicios a las características del territorio.

TENDENCIAS JOERAK

Hacia servicios sociales más inteligentes: oportunidades y retos de la IA en la intervención social

La irrupción de la inteligencia artificial en el sector público marca un punto de inflexión en la manera de concebir, organizar y prestar las políticas sociales. En un contexto de creciente complejidad social, presión demográfica y exigencias de eficiencia, la transformación digital ofrece nuevas herramientas para reforzar la capacidad de respuesta de los servicios sociales. Lejos de limitarse a la automatización o a la gestión avanzada de datos, la IA abre la puerta a modelos de intervención más preventivos, personalizados y fundamentados en la evidencia. Sin embargo, su incorporación también plantea preguntas fundamentales sobre la ética, la equidad, la gobernanza de la información y el papel insustituible del criterio profesional. Este artículo explora estas tensiones y oportunidades, revisando el estado actual del debate, las posibilidades de aplicación de la IA en los servicios sociales y los retos que deben abordarse para garantizar un desarrollo tecnológico verdaderamente orientado al bienestar de la ciudadanía.

Introducción

La transformación digital del sector público constituye uno de los vectores más decisivos del actual proceso histórico, marcado por la generalización de las tecnologías digitales. Esta transición ha venido redefiniendo las formas de organización, provisión y relación entre administraciones y ciudadanía, afectando directamente a los servicios sociales y a la práctica profesional. Inicialmente, la literatura sobre la incorporación de tecnologías informáticas en los servicios sociales se ha centrado sobre todo en dos áreas: por un lado, su enorme potencial para almacenar y gestionar datos; y por otro lado, la capacidad de intermediación virtual como herramienta para la práctica profesional (Chan y Holosko, 2018). Sin embargo, en los últimos años esta evolución ha dado paso a un debate más profundo sobre el papel de la inteligencia artificial en la mejora, modernización y sostenibilidad de los sistemas de bienestar.

La relevancia creciente de la IA dentro del sector público es inseparable del desarrollo paralelo del Big Data y de la capacidad de procesar volúmenes masivos de información con alta velocidad y heterogeneidad. Desde una perspectiva técnica, la IA *"se refiere a sistemas que muestran un comportamiento inteligente al analizar su entorno y tomar medidas, con cierto grado de autonomía, para lograr objetivos específicos"*, según la definición del Parlamento Europeo.

Estas capacidades, que abarcan desde la automatización de procesos hasta el aprendizaje automático y la toma de decisiones asistida, permiten imaginar nuevas formas de intervención pública basadas en la evidencia, la eficiencia operativa y una mayor personalización de las respuestas.

En el ámbito de los servicios sociales, la integración de la IA ha sido más tardía que en otros sectores como el sanitario o el judicial, en parte debido al peso fundamental de los elementos relacionales de la intervención social –empatía, escucha y juicio profesional que tradicionalmente se han considerado difícilmente automatizables. Sin embargo, esta percepción está cambiando. Aunque el trabajo social presenta un riesgo muy bajo de automatización completa, la IA está emergiendo como un complemento estratégico que puede fortalecer las tareas profesionales, mejorar la gestión del sistema y reforzar la capacidad de anticipación y el enfoque preventivo de las políticas sociales (Tambe y Rice, 2018).

En definitiva, la IA se presenta como una oportunidad estratégica para afrontar los desafíos actuales de los servicios sociales: la complejidad creciente de las necesidades, la presión sobre los recursos, la necesidad de coordinar sistemas fragmentados y la urgencia de mejorar la eficacia y equidad de las políticas. Su incorporación debe comprenderse no como una sustitución del juicio profesional, sino como una palanca de apoyo para fortalecerlo, permitiendo a los servicios sociales evolucionar hacia modelos más predictivos, conectados y orientados al bienestar integral de la ciudadanía.

Aplicaciones de la IA en los servicios sociales

La inteligencia artificial se ha consolidado como una herramienta clave para impulsar la modernización de los servicios sociales y fortalecer su capacidad de respuesta ante los retos demográficos, sociales y organizativos que afrontan las administraciones públicas. Su potencial abarca desde la automatización de procesos, que permite liberar tiempo para la intervención directa, hasta la analítica predictiva, que facilita la anticipación de necesidades y la implementación de modelos preventivos. Asimismo, los asistentes virtuales amplían las vías de comunicación con la ciudadanía y mejoran el acceso a la información, mientras que los sistemas de apoyo a la decisión profesional contribuyen a intervenciones más precisas y fundamentadas.

El panorama actual ya muestra iniciativas y desarrollos que avanzan en esta dirección. A continuación, se presentan las principales áreas de aplicación y algunos ejemplos que ilustran su potencial.

- Automatización de procesos administrativos

Uno de los ámbitos en los que la IA está mostrando un impacto más inmediato es la automatización de tareas administrativas repetitivas. En los servicios sociales, gran parte del tiempo de los equipos profesionales se dedica a la gestión de expedientes, la

verificación documental, la elaboración de informes, el registro de intervenciones o la coordinación entre servicios. Estas tareas, aunque necesarias, consumen recursos valiosos que podrían destinarse a la atención directa.

Mediante técnicas de automatización robótica de procesos (RPA) combinadas con algoritmos de IA, es posible simplificar y agilizar estas actividades. Los sistemas pueden procesar solicitudes, organizar información, identificar errores o incoherencias y clasificar documentación de forma automática. Asimismo, los modelos de lenguaje permiten generar borradores de informes, transcribir entrevistas y resumir información relevante, reduciendo la carga burocrática.

La automatización no solo incrementa la eficiencia interna, sino que ayuda a reducir tiempos de espera, evitando duplicidades y favoreciendo que los y las profesionales se concentren en tareas de mayor valor social: la intervención, la escucha activa y el acompañamiento. Además, al minimizar errores administrativos, contribuye a mejorar la calidad del servicio y la transparencia del sistema.

Inteligencia artificial, robotización y analítica avanzada

El Gobierno de Canarias ha emprendido una transformación profunda de sus servicios sociales a través de la incorporación de tecnologías avanzadas como la inteligencia artificial, la robótica y la analítica avanzada. Esta apuesta surge ante una creciente demanda ciudadana, la complejidad de los casos, las limitaciones de recursos y los ajustes normativos, que habían generado retrasos significativos y acumulación de solicitudes, especialmente en el ámbito de la valoración de la discapacidad.

Para revertir esta situación, el Gobierno ha desplegado una estrategia combinada que integra reformas normativas, mejoras organizativas y, de manera destacada, la aplicación directa de tecnologías emergentes. El objetivo ha sido automatizar, simplificar y agilizar los procesos administrativos, permitiendo que los equipos profesionales se centren en tareas de mayor valor añadido.

Una de las principales innovaciones ha sido la creación de agentes de IA especializados, cada uno encargado de tareas muy concretas dentro del ciclo de gestión de los expedientes: organización, procesamiento, normalización, ingestión de datos, sincronización, validación o generación de documentos. Estos agentes analizan grandes volúmenes de información procedente de diversas fuentes para clasificar y priorizar solicitudes, identificar casos urgentes, validar documentación o reclamar automáticamente datos pendientes. Como resultado, se acelera la tramitación y se mejora la eficacia en la atención a la ciudadanía.

Paralelamente, la analítica avanzada se ha convertido en una herramienta estratégica. Mediante modelos predictivos y aprendizaje automático, la administración puede anticipar tendencias, prever episodios de saturación o identificar necesidades emergentes. Esto contribuye a planificar mejor los servicios, reasignar recursos y orientar políticas públicas hacia ámbitos de mayor impacto social.

Asimismo, la robótica ha comenzado a utilizarse para automatizar tareas repetitivas y manuales que antes recaían en el personal. Un ejemplo destacado es el desarrollo de agentes automatizados que operan de manera continua —las 24 horas del día, los 7 días de la semana— revisando la entrada de solicitudes en registros y sedes electrónicas, activando de inmediato los procesos correspondientes sin necesidad de intervención humana en las fases iniciales.

Todas estas tecnologías se han implementado mediante un enfoque de “encapsulado”, que permite integrarlas de forma flexible en distintas fases de la gestión administrativa. Aunque el caso inicial se centra en la valoración de la discapacidad, este enfoque es extrapolable a otros servicios sociales, como dependencia, inclusión social, atención a personas mayores o gestión de menores y familias.

- Analítica predictiva para anticipar necesidades

La analítica predictiva se ha convertido en una de las áreas de mayor potencial dentro de los servicios sociales. Al analizar datos históricos y en tiempo real, los algoritmos pueden identificar patrones que ayudan a anticipar situaciones de riesgo o necesidades emergentes. También pueden prever incrementos en la demanda de determinados recursos, lo que permite mejorar la planificación y optimizar la asignación de recursos públicos.

El potencial de estas herramientas se incrementa cuando se aplican a modelos de intervención comunitaria. La analítica predictiva puede ayudar a mapear vulnerabilidades en un territorio, identificar colectivos especialmente frágiles y orientar la toma de decisiones hacia políticas preventivas. De este modo, los servicios sociales avanzan desde un modelo reactivo —centrado en intervenir cuando el problema ya se ha manifestado— hacia un enfoque preventivo que permite actuar antes y de manera más eficaz.

Es fundamental, no obstante, que el uso de la analítica predictiva se realice con garantías éticas, salvaguardando la privacidad, evitando sesgos y asegurando que la tecnología refuerza la equidad y no la compromete. Para ello, se requieren marcos de gobernanza robustos, transparencia sobre los modelos utilizados y supervisión por parte de profesionales del ámbito social.

Teleasistencia predictiva

El proyecto de teleasistencia predictiva, promovido por la Diputación Foral de Gipuzkoa –a través de la Fundación Adinberri– y el Gobierno Vasco, tiene como finalidad reforzar el bienestar, la autonomía y la seguridad de las personas mayores que desean continuar viviendo en sus hogares. Este proyecto piloto, implantado en la comarca de Oarsoaldea, está dirigido a mejorar la calidad de vida de unas 250 personas usuarias del servicio de teleasistencia BetiOn, mediante la detección temprana de posibles riesgos y la prestación de un acompañamiento más personalizado.

La iniciativa está diseñada para detectar preventivamente señales de deterioro cognitivo, situaciones de soledad no deseada y posibles incidentes de seguridad, como caídas dentro de la vivienda. Para hacerlo posible, un consorcio formado por empresas y *startups* tecnológicas instala en los domicilios distintos dispositivos que permiten poner en marcha este modelo de teleasistencia avanzada.

Las herramientas empleadas incluyen tecnologías de procesamiento del habla para la detección temprana del deterioro cognitivo y la soledad, así como sensores y relojes inteligentes capaces de alertar sobre riesgo de caída. Todo esto se complementa con analítica avanzada, inteligencia artificial y Big Data, herramientas que facilitan la creación de modelos predictivos orientados a intervenir antes de que el problema se materialice. El propósito es demostrar el valor que aportan estas tecnologías a una atención realmente personalizada para las personas mayores que optan por permanecer en su domicilio.

El equipo especializado del servicio de teleasistencia realizará el seguimiento de posibles situaciones de vulnerabilidad, ya sean relacionadas con la soledad, el deterioro cognitivo o la seguridad en el hogar. Con la información recabada se evaluará la aplicación del modelo 4P –Predicción, Prevención, Personalización y Participación– incorporando la inteligencia artificial como apoyo clave en la toma de decisiones. Los datos se recogerán mediante diversos canales y dispositivos tecnológicos, lo que permitirá diseñar planes de intervención ajustados a las necesidades de cada persona. Gracias a una plataforma digital basada en IA, el objetivo es evolucionar hacia una teleasistencia proactiva, donde la anticipación marque la diferencia.

- Asistentes virtuales para la atención a la ciudadanía

Los asistentes virtuales, basados en tecnologías de procesamiento del lenguaje natural, están transformando la forma en que la ciudadanía se relaciona con la administración. En los servicios sociales, pueden ofrecer información clara y accesible, responder preguntas frecuentes, guiar en la tramitación de solicitudes o facilitar el acceso a recursos disponibles.

Disponibles las 24 horas del día, estos sistemas permiten descongestionar líneas telefónicas y oficinas de atención presencial, reduciendo tiempos de respuesta y aumentando la accesibilidad para quienes tienen dificultades para desplazarse o necesitan atención fuera del horario habitual. Además, pueden interactuar mediante voz o texto, adaptándose a diferentes perfiles y capacidades.

Un asistente virtual puede acompañar a las personas usuarias durante todo el proceso de relación con los servicios sociales: orientar sobre requisitos para prestaciones, explicar cómo solicitar ayudas, recordar citas o incluso detectar, a través del lenguaje, señales de malestar o situaciones que requieren derivación inmediata a profesionales humanos.

Lejos de sustituir el contacto directo, los asistentes virtuales actúan como una puerta de entrada complementaria, facilitando que las personas lleguen antes y de manera más sencilla al recurso adecuado. Su uso resulta especialmente valioso para colectivos que pueden sentirse intimidados por la burocracia o que prefieren recibir información de manera gradual antes de acudir a una entrevista profesional.

- Sistemas de apoyo a la decisión profesional

La IA también puede desempeñar un papel clave como herramienta de apoyo a la toma de decisiones. A partir de la información disponible, los sistemas pueden identificar alternativas de intervención, sugerir priorizaciones, señalar riesgos que podrían pasar inadvertidos o proponer recursos existentes en el territorio. Este tipo de apoyo resulta especialmente útil en contextos complejos donde intervienen múltiples factores sociales, económicos, familiares y de salud.

Los sistemas de recomendación basados en IA pueden ayudar, por ejemplo, a determinar niveles de intensidad en la intervención, identificar qué programas han sido más eficaces en casos similares o alertar cuando una situación requiere una actuación urgente. Estos modelos no sustituyen el criterio profesional, pero sí ofrecen una segunda capa de análisis que facilita una toma de decisiones más informada, coherente y personalizada.

Asimismo, la IA puede contribuir a estandarizar criterios de valoración, reducir la variabilidad entre territorios o equipos, y aumentar la equidad en el acceso a las prestaciones. Cuando se diseñan de forma participativa y transparente, estos sistemas se convierten en aliados para reforzar la calidad técnica del trabajo social.

Herramientas inteligentes para la intervención social

Las Áreas Básicas de Servicios Sociales de Cataluña trabajaban con sistemas de información muy diversos y poco integrados entre sí. Esta fragmentación dificultaba disponer de una visión global y actualizada de los datos de la ciudadanía y complicaba la intervención social.

Para dar respuesta a esta situación, el Departamento de Derechos Sociales de la Generalitat de Cataluña ha impulsado un proyecto de transformación digital orientado a mejorar y facilitar la intervención social. En este marco, se han unificado los datos en un único repositorio y se han reformulado los procesos para crear soluciones transversales e interoperables con el resto de los departamentos de la Generalitat.

Uno de los elementos de esta transformación es el sistema wSocial, que integra los módulos necesarios para el trabajo diario de los servicios sociales: la programación de citas, las entrevistas entre la ciudadanía y los equipos profesionales, la elaboración del plan de actuación y el seguimiento de las actuaciones. El sistema incorpora un visor unificado de los datos de la ciudadanía, actualizado y accesible según las competencias de cada profesional, garantizando un uso ético de la información.

Un elemento clave de wSocial es la integración del diccionario InterSocial, un vocabulario codificado y estandarizado que permite compartir y comprender la información de manera homogénea entre servicios y departamentos. Este diccionario facilita que los y las profesionales se centren en el acompañamiento y la escucha activa, mientras que el sistema les ayuda a estructurar la información, resumir la intervención e identificar necesidades y situaciones de vulnerabilidad.

Este diccionario sirve como base para las herramientas de inteligencia artificial que incorpora el sistema wSocial que, a partir del análisis de un gran volumen de entrevistas recogidas en lenguaje natural, ayudan a detectar necesidades, proponer actuaciones, armonizar la intervención social y optimizar la gestión de recursos, desde la primera entrevista hasta el seguimiento del plan de trabajo.

Este nuevo modelo aporta beneficios claros. Para la ciudadanía, supone una atención más integral y personalizada, una prestación de servicios más coordinada y efectiva y una reducción de los tiempos de espera. Para las personas trabajadoras de los servicios sociales, mejora la coordinación y el intercambio de información, aumenta la eficiencia en las entrevistas y permite el uso de un lenguaje común y estandarizado en todo el territorio.

Retos éticos, sociales y operativos

Tal y como se ha mencionado anteriormente, la incorporación de la inteligencia artificial en los servicios sociales representa una oportunidad estratégica para transformar un sector tradicionalmente afectado por la sobrecarga burocrática, la escasez de recursos y la creciente complejidad de las necesidades sociales. Sin embargo, esta transición tecnológica también plantea un conjunto de desafíos éticos, sociales y operativos de gran calado, especialmente en un ámbito donde la atención directa a personas en riesgo o situación de vulnerabilidad constituye el eje fundamental de la intervención.

En primer lugar, conviene destacar los retos estructurales de carácter operativo que condicionan cualquier aplicación de inteligencia artificial. Como señalan Minguijón y Serrano-Martínez (2022), “el verdadero nudo gordiano” para el desarrollo de la IA en los servicios sociales reside en las limitaciones de los sistemas de información, altamente fragmentados, con escasa interoperabilidad entre administraciones y sin un almacenamiento de datos robusto que permita alimentar correctamente los algoritmos predictivos o de apoyo a la decisión y la evaluación. Esta situación se ve agravada por la discontinuidad del proyecto estatal de Historia Social Unificada y la proliferación de soluciones autonómicas heterogéneas, lo que evidencia un panorama desigual que obstaculiza el avance hacia una administración verdaderamente inteligente.

A ello se suma que la digitalización acelerada –intensificada tras la pandemia– ha puesto de manifiesto la necesidad de sistemas interoperables y estables, pero también la urgencia de contar con infraestructuras seguras y una gobernanza de datos sólida.

Desde el punto de vista ético y jurídico, uno de los principales desafíos es garantizar la protección de datos, la privacidad y la transparencia algorítmica en un ámbito en el que se manejan historiales personales sensibles, valoraciones técnicas y diagnósticos sociales. El uso de grandes volúmenes de datos provenientes de diferentes sistemas –sanitarios, educativos, de vivienda o empleo– implica riesgos elevados de exposición, uso indebido o accesos no autorizados. Esta es una de las preocupaciones que manifiestan los y las trabajadoras sociales ante los posibles impactos de la IA sobre la confidencialidad, la seguridad de la información y la responsabilidad profesional frente a errores derivados del uso de algoritmos (García, P. et al., 2025).

Asimismo, la literatura advierte que la manipulación de macrodatos sensibles plantea dilemas éticos relacionados con la invasión de la intimidad, la identidad digital y la protección frente a usos maliciosos, generando la necesidad de desarrollar estrategias de ciberseguridad y marcos normativos que protejan derechos fundamentales de las personas usuarias (Vallejo-Andrada, A. et al., 2024).

Otro reto ético de especial relevancia es el riesgo de sesgos y discriminación algorítmica. Los modelos predictivos pueden reproducir desigualdades históricas si se entrenan con datos incompletos, sesgados o no representativos. En los servicios sociales, esto podría traducirse en valoraciones erróneas, diagnósticos injustos o decisiones automatizadas que afecten de manera desproporcionada a determinados colectivos. La literatura advierte que los sesgos algorítmicos pueden tener consecuencias directas en la justicia social, comprometiendo la equidad en el acceso a prestaciones, la priorización de datos o la evaluación de riesgos, y plantea que estos problemas podrían constituir incluso situaciones de mala praxis profesional si no se detectan y corrigen adecuadamente.

En el terreno social y relacional, la inteligencia artificial genera importantes interrogantes. La práctica profesional del trabajo social se basa en la relación de ayuda, la empatía, la escucha activa y el acompañamiento personalizado. Como ejemplo, las trabajadoras sociales que fueron entrevistadas en el estudio de García, P. et al. (2025) mostraron una clara resistencia a utilizar herramientas de IA en funciones de intervención directa, mediación o atención personal, pese a que sí reconocen su utilidad para tareas administrativas o de gestión. La literatura también señala que la automatización puede generar percepciones de deshumanización, pérdida de confianza o sensación de trato impersonal, especialmente en colectivos vulnerables que requieren apoyo emocional y acompañamiento continuo.

Ligado a lo anterior, la brecha digital y la accesibilidad constituyen obstáculos significativos. La digitalización de los servicios sociales puede excluir a quienes carecen de dispositivos, conectividad o competencias tecnológicas, profundizando desigualdades ya existentes. Como advierten los estudios revisados, la implementación de sistemas de IA exige garantizar que las herramientas sean accesibles, inclusivas y adaptadas a las capacidades de todos los grupos poblacionales, especialmente personas mayores, personas con discapacidad, personas con dificultades económicas o con bajo nivel de alfabetización digital.

Finalmente, en el plano organizativo y profesional, los servicios sociales enfrentan la necesidad urgente de incorporar nuevos perfiles, competencias y procesos de trabajo. La evidencia empírica muestra que el nivel de conocimiento sobre IA entre las trabajadoras sociales es actualmente bajo, y que existe una fuerte demanda de formación específica para garantizar un uso responsable, crítico y ético de estas tecnologías (García, P. et al., 2025). Son muchos los estudios que señalan que la capacitación del personal, la adaptación de las estructuras organizativas y la actualización de los marcos normativos son condicionantes indispensables para integrar la inteligencia artificial de forma sostenible y legítima.

Perspectivas de futuro y recomendaciones

La expansión de la inteligencia artificial en los servicios sociales exige avanzar hacia un modelo de desarrollo tecnológico responsable, ético y orientado a fortalecer la misión fundamental del sistema: garantizar derechos, promover el bienestar y prevenir situaciones de vulnerabilidad. Los documentos analizados coinciden en que el potencial de la IA es significativo, pero solo podrá desplegarse plenamente si se acompaña de una estrategia pública clara, rigurosa y sustentada en principios de equidad, transparencia y participación profesional.

En primer lugar, se requieren líneas estratégicas para una implementación responsable, entre las que destaca la consolidación de infraestructuras de información integradas y de calidad. Como se ha mencionado en el apartado sobre retos éticos, sociales y operativos, la falta de sistemas de información robustos y estandarizados es una de las principales limitaciones identificadas para el desarrollo de la inteligencia artificial. Por tanto, para avanzar hacia un uso efectivo de estas tecnologías, las administraciones deben invertir en plataformas interoperables, bases de datos actualizadas y protocolos comunes de registro, todo ello orientado a la creación de ecosistemas de datos coherentes y fiables.

En segundo lugar, la transición hacia una IA responsable requiere una gobernanza de datos ética, capaz de garantizar que el uso de las tecnologías se alinee con los principios de justicia social, igualdad y protección de derechos. En el ámbito de los servicios sociales, donde se manejan datos sensibles, esta gobernanza debe articular normas claras de transparencia algorítmica, auditorías internas y externas para evitar sesgos discriminatorios, y canales que permitan a las personas usuarias comprender y cuestionar las decisiones automatizadas. Asimismo, la existencia de marcos regulatorios europeos –como el Reglamento General de Protección de Datos o la ley de IA– constituye una base sólida, pero su adaptación al ámbito social requerirá desarrollar estándares específicos para trabajar con la población vulnerable.

Un aspecto crítico de esta gobernanza es la participación profesional. La gobernanza de la IA requiere que los y las profesionales del trabajo social participen activamente en el diseño de algoritmos y comprendan sus implicaciones, incorporando competencias digitales avanzadas en su formación y reciclaje (Goldkind, 2021). De lo contrario, existe el riesgo de que la tecnología se aplique sin suficiente sensibilidad social o sin el criterio profesional necesario. Esta preocupación está ampliamente respaldada por la investigación empírica. Las trabajadoras sociales señalan que el actual desconocimiento sobre la IA dificulta su uso y limita la capacidad de identificar sesgos o valorar adecuadamente sus resultados. Por ello, los programas formativos deben incluir alfabetización algorítmica, comprensión crítica de modelos predictivos y competencias para la evaluación ética de tecnologías emergentes.

En cuanto a las perspectivas de futuro, la literatura coincide en que la IA tiene un enorme potencial para favorecer un sistema de servicios sociales más preventivo, eficiente y personalizado. La IA puede facilitar modelos de intervención anticipatoria, al identificar patrones de riesgo y necesidades emergentes antes de que se conviertan en situaciones de mayor gravedad. Los ejemplos recogidos en este artículo muestran aplicaciones prometedoras para mejorar la gestión administrativa, optimizar tiempos de respuesta y reducir cargas

burocráticas. Asimismo, la IA puede aportar herramientas que personalicen la atención mediante sistemas de apoyo a la toma de decisiones, análisis integrados de casos complejos o recomendaciones basadas en la evidencia, siempre complementando –y nunca sustituyendo– el juicio profesional.

En definitiva, la implementación de la inteligencia artificial en los servicios sociales deberá basarse en una visión estratégica compartida entre administraciones públicas, instituciones académicas, sector tecnológico y organizaciones del tercer sector. Ello implica promover alianzas, laboratorios de innovación social, proyectos piloto y evaluaciones rigurosas que permitan avanzar de forma escalonada y con garantías. Al integrar estas perspectivas, la IA puede convertirse en una herramienta poderosa para fortalecer el sistema, mejorar la equidad, anticipar necesidades y construir una intervención social más inteligente, humana y orientada al bienestar integral.

Bibliografía de referencia

Chan, C. y Holosko, M. (2018). Technology for Social Work Interventions. In book: Oxford Bibliographies in Social Work. Publisher: Oxford University Press. Editors: Edward Mullen. Oxford Bibliographies. [[Enlace](#)]

García, P. et al. (2025). La percepción de las trabajadoras sociales sobre las implicaciones de la Inteligencia Artificial en sus prácticas profesionales: Un estudio exploratorio. Cuadernos de Trabajo Social, vol. 38, n. 1, p. 97-108. [[Enlace](#)]

Goldkind, L. (2021). Social Work and Artificial Intelligence: Into the Matrix. Social Service Faculty Publications, 19. [[Enlace](#)]

Minguijón, J. y Serrano-Martínez, C. (2022). La Inteligencia Artificial en los Servicios Sociales: estado de la cuestión y posibles desarrollos futuros. Cuadernos de trabajo social, 35(2), p. 319-329. [[Enlace](#)]

Seniutis, M. et al. (2024). Conceptual framework for ethical artificial intelligence development in social services sector. Human Technology, 20(1), p. 6–24. [[Enlace](#)]

Tambe, M. y Rice, E. (eds.) (2018). Artificial Intelligence and Social Work. Cambridge University Press, 290 p. [[Enlace](#)]

Vallejo-Andrada, A. et al. (2024). Aportaciones y limitaciones de la incorporación de la inteligencia artificial a los servicios sociales: Una revisión sistematizada. Methaodos. Revista de ciencias sociales, 12(2), 16 p. [[Enlace](#)]

ESTADISTIKA BULETINA BOLETIN ESTADISTICO

nº 22

AURKEZPENA. Etorkizunerako gakoak: beharren proiektzioa, gazteen aurreikuspenak, landatartasuna eta adimen artifiziala
PRESENTACIÓN. Claves para el futuro: proyección de necesidades, expectativas juveniles, ruralidad e inteligencia artificial

PANORAMA/IKUSPEGI. Más de 30.000 personas recibieron apoyo de la red alavesa de servicios sociales en 2024

A FONDO. Análisis de la aplicación de las coberturas del II Plan Estratégico de Servicios Sociales de la CAPV en el diagnóstico del sistema en Álava

SAKONEAN. Nolako etorkizuna aurreikusten dute Arabako gazteek?

A FONDO. Cómo medir la ruralidad: indicadores para una aproximación a la caracterización del entorno rural

TENDENCIAS. Hacia servicios sociales más inteligentes: oportunidades y retos de la IA en la intervención social

► ARABAKO FORU ALDUNDIA



► DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA